

«RIT»

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de Osorno  
CAUSA ROL : C-1463-2023  
CARATULADO : INMOBILIARIA COSTA TERA O SPA/SOCIEDAD  
AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A

Osorno, veinte de Julio de dos mil veinticuatro.

### **VISTOS:**

ISABEL NAVARRO CARRASCO, abogada, en representación judicial convencional, según se acreditará, de **INMOBILIARIA COSTA TERA O SpA**, sociedad comercial del giro de su denominación, todos con domicilio para estos efectos en Amapolas 101, Los Copihues, Osorno, vengo en deducir fundada demanda de reembolso, en procedimiento ordinario de mayor cuantía, en contra de **SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A.**, empresa eléctrica concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, representada por Francisco Alliende Arriagada, factor de comercio, ambos con domicilio principal en calle Bulnes N°441, Osorno y en Edificio Corporativo ubicado en Eleuterio Ramírez N° 719, Osorno, en adelante simplemente "SAESA" o "la empresa eléctrica", sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y de Derecho: **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO** 1. Mi representada solicitó a SAESA, en su calidad de empresa concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, suministro eléctrico para el proyecto de parcelación denominado "Terao", ubicado en la comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. 2. Para tales efectos, SAESA elaboró un proyecto y presupuesto, y solicitó a mi representada su pago, en forma previa a la ejecución de las obras eléctricas, conforme con el siguiente detalle: a) Carta de presupuesto N°37207, de fecha 15.11.19, por la suma de **2358,1 UF más IVA**; b) Carta de presupuesto N°49272, de fecha 12.02.21, por la suma de **275 UF más IVA** c) Carta de presupuesto N°51333, de fecha 25.05.21, por la suma de **156 UF más IVA**. 3. En este contexto, SAESA emitió a mi representada las siguientes facturas correlativas, en función de los presupuestos mencionados precedentemente: a) Factura N°6316044, de fecha 14.09.20, por la suma de **2358,1 UF más IVA** (Carta de presupuesto N°37207); b) Factura N°6850253, de fecha 10.06.21, por la suma de **275 UF más IVA** (Carta de presupuesto N°49272); c) Factura N° 6850252, de fecha 10.06.21, por la suma de **156 UF más IVA** (Carta de presupuesto N°51333). 4. Mi representada pagó las facturas precitadas en la forma y fecha siguientes: a) La Factura N° 6316044, de fecha 14.09.20, por la suma de **2358,1 UF más IVA** (Carta de presupuesto N°37207), fue pagada mediante la suscripción de un convenio de pago, de fecha 17.09.20, y la entrega de dos cheques cuyas copias se acompañan en otrosí. b) Factura N°6850253, de fecha 10.06.21, por la suma de **275 UF más IVA** (Carta de presupuesto N°49272), fue pagada con fecha 22.06.21, mediante dos depósitos bancarios cuyas copias se acompañan en otrosí. c) Factura N°6850252, de fecha 10.06.21, por la suma de **156 UF más IVA** (Carta



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KEVGXXTXJXX

de presupuesto N°51333), fue pagada con fecha 22.06.21, mediante dos depósitos bancarios cuyas copias se acompañan en otrosí. **5.** Una vez finalizadas las obras eléctricas necesarias para dar suministro eléctrico, SAESA exigió a mi representada la transferencia de las instalaciones construidas, para cuyos efectos remitió dos documentos, en formato tipo y de adhesión, esto es, (i) una Declaración Jurada de Instalaciones Eléctricas y (ii) un Contrato de Transferencia de Instalaciones Eléctricas, solicitando que fueran firmadas y entregadas por mi representada como requisito previo para la conexión del loteo, lo que esta parte cumplió con fecha 01.12.21. **6.** De este modo, SAESA obtuvo de mi representada el financiamiento necesario para la ejecución de las obras eléctricas, y luego de ello, se hizo dueña de las instalaciones eléctricas construidas por ella misma, conforme con un proyecto confeccionado por SAESA. **7.** Pues bien, como se explicará en detalle en los Fundamentos de Derecho, los pagos exigidos y percibidos por SAESA, por las obras eléctricas ya individualizadas, resultan ilegales. En efecto, SAESA, en su calidad de concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, tiene la obligación legal, de su exclusiva cuenta y cargo, dentro de su zona de concesión, de asumir el costo de las obras de distribución, incluyendo también la construcción de los empalmes y medidores, motivo por el cual no debió haber cobrado suma alguna a mi representada. En consecuencia, resulta del todo procedente, conforme a Derecho, que SAESA restituya todas las sumas de dinero- debidamente reajustadas, más intereses corrientes- que se cobraron a mi representada y que ésta pagó, no debiendo hacerlo. **II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. Legislación eléctrica. Obligación legal de dar suministro eléctrico a quien lo solicite dentro de la zona de concesión. 1.** De acuerdo con lo prescrito por la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el D.F.L. N°4/20.018 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 12 de Mayo de 2.006, que a su vez contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante simplemente “LGSE”, las empresas concesionarias de servicio público de distribución de energía eléctrica tienen la obligación legal de dar servicio a quien lo solicite dentro de su zona de concesión. Así, el artículo 125 de la LGSE dispone, textualmente que: “En su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que el usuario esté ubicado en la zona de concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 126. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario”. **2.** Esto implica que SAESA, dentro de su zona de concesión, debe asumir el costo de construcción de las redes de distribución, incluyendo el empalme y medidor, como reza el artículo 139 bis de la LGSE: “El empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que



preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190, o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas *tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas*". **3.** Esta obligación legal es de la esencia de la calidad de concesionaria de servicio público de suministro de energía eléctrica, motivo por el cual el Estado cuenta incluso con la facultad de exigir la ejecución de las obras, dentro de ciertos plazos, en caso de incumplimiento o retardo, bajo apercibimiento de multas diarias en caso de infracción, y que pueden derivar, en caso de persistir el incumplimiento, en la mayor sanción disponible en la LGSE, esto es, la caducidad de la concesión. Por ello el artículo 136 de la LGSE prescribe que: "La extensión de servicio en las zonas de concesión se hará dentro de los plazos máximos que fije la Superintendencia, oyendo al concesionario. La Superintendencia podrá compeler a los concesionarios de servicio público de distribución al cumplimiento de esta obligación, con una multa no inferior a cinco UTM por cada día que transcurra después de expirado el plazo fijado para hacer las instalaciones. En caso de no ejecutarse los trabajos a pesar de la multa impuesta, el Presidente de la República podrá declarar caducada la concesión y disponer, por consiguiente, su transferencia a terceros en la forma que lo establecen los artículos 43° y siguientes". **4.** A su turno, el Reglamento general de la LGSE, contenido en el D.S. N°327/97 del Ministerio de Minería de fecha 12.12.97, publicado en el Diario Oficial con fecha 10.09.98, en el mismo sentido precitado, dispone en el artículo 105, que: "Sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo 5 de este Título, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio en su zona de concesión, a quien lo solicite, sea que el usuario este ubicado en la zona de concesión o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario. Para dichos efectos, las empresas distribuidoras deberán mantener a disposición del público la información técnica de sus instalaciones incluyendo los planos de sus redes de distribución, a fin de entregarla cada vez que les sea requerida por estos últimos, para el adecuado diseño, ejecución y conexión de las instalaciones eléctricas, a fin de evitar peligro para las personas o daño en las cosas. Las empresas distribuidoras deberán entregar la información señalada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, la que podrá ser entregada mediante técnicas y medios electrónicos". **Aporte Financiero Reembolsable. 5.** Ahora bien, el único caso en que la regulación eléctrica autoriza a la empresa eléctrica concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica para solicitar de sus clientes el pago previo de una cierta cantidad de dinero, para los efectos de realizar las obras de distribución, dentro de su zona de concesión, es el Aporte Financiero Reembolsable ("AFR") regulado en los artículos 126 a 129 de la LGSE. **6.** Sin embargo, en el caso de un AFR, la empresa eléctrica



concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica debe devolver o reembolsar al cliente las sumas percibidas. 7. En efecto, tales normas jurídicas prescriben lo siguiente, que para mayor claridad transcribimos íntegramente: “Artículo 126°.- Cualquier empresa eléctrica podrá exigir a los usuarios de cualquier naturaleza que soliciten servicio, o a aquellos que amplien su potencia conectada, aportes de financiamiento reembolsables para la ejecución de las ampliaciones de capacidad requeridas en generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Adicionalmente, la empresa podrá exigir a los usuarios que soliciten o amplíen su servicio en potencias conectadas superiores a 10 kilowatts, una garantía suficiente para caucionar que la potencia solicitada por éstos será usada por el tiempo adecuado. Los montos máximos por concepto de financiamiento serán determinados por las empresas y podrán ser aplicados previa publicación en un diario de circulación nacional”. “Artículo 127°.- Adicionalmente a lo estipulado en el artículo 126, las empresas concesionarias de servicio público de distribución podrán exigir a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario. Dicho aporte podrá efectuarse de dos formas: 1.- El peticionario podrá construir las obras de extensión sobre la base de un proyecto aprobado por la empresa eléctrica. El valor de estas instalaciones, que corresponde al financiamiento reembolsable aportado por el peticionario, será determinado por la empresa en el momento de aprobar el proyecto; 2.- El peticionario podrá financiar las obras por el valor determinado por la empresa, obligándose ésta a construirla, una vez asegurado el financiamiento. “Artículo 128°.- Los aportes financieros que, según las disposiciones de la presente ley, deban ser reembolsados por la empresa eléctrica, se devolverán a la persona natural o jurídica que haya entregado el aporte, o bien a las personas que ésta designe, según la estipulación que acepte la empresa. Con la excepción de las devoluciones mediante acciones, dichos aportes deberán ser reembolsados por su valor inicial reajustado e intereses. Para las empresas de transmisión, el interés deberá ser igual a la tasa de descuento establecida en el artículo 118° al momento del acuerdo. Para las empresas generadoras y distribuidoras, el interés deberá ser igual a la tasa de actualización estipulada en el artículo 182o de esta ley. La forma y el plazo de las devoluciones se determinarán en un contrato que se firmará entre la empresa y quien deba hacer el aporte reembolsable. Las devoluciones podrán ser pactadas en dinero, en documentos mercantiles, en suministro eléctrico, en acciones comunes de primera emisión de la propia empresa o mediante aquellas acciones que ésta hubiere recibido de otra empresa eléctrica como devolución de aportes por ella efectuados, o mediante cualquier otro mecanismo que acuerden las partes. La elección de la forma de devolución corresponderá a la empresa concesionaria, pero el aportante podrá oponerse a ella cuando la devolución propuesta por la empresa no le significare un reembolso real. Si no hubiere acuerdo resolverá la Superintendencia,



oyendo a las partes. Si la devolución pactada no se hiciere en dinero, los títulos respectivos deberán ser endosables. Si el mecanismo de devolución fuere otro que acciones, el plazo máximo de reembolso será de quince años.” “Artículo 129°.- Las empresas eléctricas no podrán cobrar gastos por concepto de devolución de los aportes financieros reembolsables a que se ha hecho mención en los artículos anteriores”. **Del Pago de lo no debido. 8.** Nuestro Código Civil, en adelante simplemente “C.C.” regula el pago de lo no debido como fuente de la obligación de restituir lo pagado indebidamente y del derecho a repetir ese pago (arts. 2.295 y ss. CC). **9.** El legislador justifica el surgimiento de esta obligación en la fuente que denomina cuasicontrato, que es definido como un hecho voluntario y lícito de la persona que se obliga (arts. 1.437 CC y art. 2.284.2 CC). El Código regula tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad (art. 2.285 CC). **10.** En el caso del pago de lo no debido, la obligación de devolver lo pagado se genera del hecho voluntario que consiste en recibir el pago sin que exista una obligación que le sirva de fundamento. **11.** El Código exige que el pago sea hecho por error, y dispone que “si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado” (art. 2.295.1 CC). El error puede ser de hecho o de derecho (art. 2.297 CC). **12.** Cabe señalar, por último, que la doctrina chilena ha visto en este derecho una manifestación del principio de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sin una causa que lo justifique. **13.** Así las cosas, si se estimare que, en la especie, no nos encontramos ante la figura de un AFR, de todos modos, la demandada debe reembolsar o restituir lo cobrado en forma indebida, por los motivos expuestos. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, y disposiciones legales citadas, sírvase US, tener por interpuesta fundada demanda de reembolso, en procedimiento ordinario de mayor cuantía, en contra SAESA, ya individualizada, acogerla a tramitación y, previa tramitación legal, declarar: a) Que en la especie se configuran los requisitos de la figura legal de aporte financiero reembolsable, regulado en la LGSE, o en subsidio, del cuasicontrato de pago de lo no debido, regulado en el Código Civil; b) Que, en consecuencia, se condena a SAESA a reembolsar a mi representada, la suma de **2.789,1 UF**, más el valor recargado por concepto de IVA, junto con el pago de intereses corrientes, devengados desde la fecha de recepción del pago por parte de la demandada, y hasta la fecha de reembolso efectivo, o la suma que US estime que en Derecho corresponde conforme con la ley y el mérito del proceso; c) Que se condena en costas a SAESA, en caso de oposición.

La demanda fue notificada a Francisco Alliende Arriagada, en representación de Sociedad Austral de Electricidad S. A, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

La parte demandada contestó la demanda de reembolso y subsidiaria de pago de lo no debido, intentada en estos autos por INMOBILIARIA COSTA TERA SPA, en contra de mi representada



Sociedad Austral de Electricidad S.A., en adelante e indistintamente SAESA; solicitando se sirva rechazarla, en todas sus partes, por ser manifiestamente infundada, **I.- ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.**

**1)** De la lectura del libelo de autos, aparece que la actora solicitó a SAESA, en su calidad de empresa concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, suministro eléctrico para el proyecto de parcelación denominado "Terao", ubicado en la comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. **2)** Agrega la actora que, para tales efectos, SAESA elaboró un proyecto y presupuesto, y le solicitó su pago, en forma previa a la ejecución de las obras eléctricas, conforme con el siguiente detalle: a) Carta de presupuesto N°37207, de fecha 15.11.19, por la suma de 2358,1 UF más IVA; b) Carta de presupuesto N°49272, de fecha 12.02.21, por la suma de 275 UF más IVA; c) Carta de presupuesto N°51333, de fecha 25.05.21, por la suma de 156 UF más IVA. Luego indica la actora que, vinculado a los presupuestos antes referidos, mi representada emitió las siguientes facturas: a) Factura N°6316044, de fecha 14.09.20, por la suma de 2358,1 UF más IVA (Carta de presupuesto N°37207), la que fue pagada mediante la suscripción de un convenio de pago, de fecha 17.09.20. b) Factura N°6850253, de fecha 10.06.21, por la suma de 275 UF más IVA (Carta de presupuesto N°49272), la que fue pagada con fecha 22.06.21, mediante dos depósitos bancarios. c) Factura N°6850252, de fecha 10.06.21, por la suma de 156 UF más IVA (Carta de presupuesto N°51333), la que fue pagada con fecha 22.06.21, mediante dos depósitos bancarios. **3)** Agrega la actora que, finalizadas las obras eléctricas necesarias para dar suministro, SAESA le habría exigido la transferencia de las instalaciones construidas, como requisito previo para la conexión del loteo, traspaso que tuvo lugar el 01 de Diciembre de 2.021. **4)** Denuncia la demandante en su libelo, que los pagos exigidos y percibidos por SAESA, serían ilegales dado que, en su calidad de concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, tiene la obligación legal, de su exclusiva cuenta y cargo, dentro de su zona de concesión, de asumir el costo de las obras de distribución, incluyendo también la construcción de los empalmes, por lo cual no debió haberle cobrado suma alguna. **5)** Como fundamentos de derecho, denuncia que mi representada, con su actuar, habría vulnerado lo dispuesto en los artículos 125, 126, 129, 136 y 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE). **6)** Agrega, sin entregar mayor explicación, que, en la especie, se constituiría la figura del Aporte Financiero Reembolsable (AFR), y que producto del mismo, la empresa eléctrica concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, debe devolver o reembolsar al cliente las sumas percibidas. **7)** Luego señala la actora que, de llegar a estimarse que, en la especie no nos encontramos ante la figura de un AFR, de todos modos, la demandada debe reembolsar o restituir lo cobrado en forma indebida por concurrir los supuestos del cuasicontrato de pago de lo no debido, sin explicar de manera alguna, de qué forma habría concurrido en la especie, el error en los pagos efectuados. **8)** Finalmente, de la lectura del petitorio del libelo, aparece



que la actora viene solicitando a SS., declare: i) Que en la especie se configura la figura del Aporte Financiero Reembolsable o AFR; y en subsidio, declare que concurren los supuestos del cuasicontrato del pago de lo no debido; ii) Que se condena a SAESA a reembolsarle la suma de 2.789,1 UF, más el valor recargado por concepto de IVA, junto con el pago de intereses corrientes, devengados desde la fecha de recepción del pago y hasta la fecha de reembolso efectivo; iii) Condene en costas a SAESA, en caso de oposición.

**II.- CONTESTA DERECHAMENTE DEMANDA: ALEGACIONES Y DEFENSAS. A) INCONCURRENCIA DEL SUPUESTO NORMATIVO QUE SIRVE DE SUSTENTO A LA ACCIÓN PRINCIPAL DE REEMBOLSO INCOADA EN ESTOS AUTOS: INEXISTENCIA DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA EN QUE SE UBICA EL PROYECTO DE PARCELACIÓN DE LA DEMANDANTE.**

**1.-** De la lectura del acápite del derecho, el libelista denuncia como infringido por parte de SAESA, lo dispuesto, entre otras, las siguientes normas: a) Artículo 125 de la LGSE, la que dispone que “En su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que el usuario este ubicado en la zona de concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 126. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario” y; b) Artículo 105 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos (RLGSE) la que dispone que “Sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo 5 de este Título, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio en su zona de concesión, a quien lo solicite, sea que el usuario este ubicado en la zona de concesión o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario”. **2.-** Como se anticipó anteriormente, tanto la norma del artículo 125 de la LGSE como del artículo 105 del RLGSE, disponen que, en su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que el usuario este ubicado en la zona de concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros. **3.-** A su vez, la norma del artículo 139 de la LGSE (también denunciada como infringida en el libelo de marras) dispone que el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución.- A su vez, la norma del artículo 136 de la LGSE (también referida en la demanda de autos) dispone que la extensión de servicio en las zonas de concesión se hará dentro de los plazos máximos que fije la Superintendencia, oyendo al concesionario. **4.-** Por último, la norma del artículo 127 de la LGSE, a propósito de la regulación del contrato de Aporte Financiero Reembolsable (AFR), figura en la que la demandante sustenta su



acción principal de reembolso, dispone que las empresas concesionarias de servicio público de distribución podrán exigir a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario. Y por su parte, la norma del artículo 128 inciso 5° de la LGSE, a propósito de la misma figura del AFR, dispone que la elección de la forma de devolución corresponderá a la empresa concesionaria, pero el aportante podrá oponerse a ella cuando la devolución propuesta por la empresa no le significare un reembolso real. **5.-** Como se acreditará oportunamente, Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA, no cuenta actualmente ni contaba a la fecha en que ejecutó las obras de electrificación en el predio de la demandante, con concesión de distribución de energía eléctrica, en el sector o zona donde se emplaza el proyecto inmobiliario que desarrolla la empresa demandante, a saber, sector Terao, de la Comuna de Chonchi. **6.-** La situación anterior (inexistencia de concesión de distribución de energía eléctrica), estaba en pleno conocimiento de la empresa demandante, desde que en el mismo presupuesto que aquella refiere en su libelo y que acompaña a este último, a saber, presupuesto N° 49272, se puede leer claramente en su página 1, en el acápite “NOTAS”: “1.- Obra fuera de zona de concesión”. **7.-** Por su parte, y si bien en el acápite “NOTAS” del presupuesto N° 37207 no se indica que las obras estaban fuera de zona de concesión, ello se debe exclusivamente a una omisión del encargado de la redacción del mentado presupuesto. Por lo demás, ello aparece de manifiesto desde que, no solo los dos últimos presupuestos referidos (N°49272 y N°37207) dicen relación con el mismo proyecto inmobiliario, desarrollado en el mismo sector, dentro de las 72 hectáreas que comprende el predio de la demandante, sino que el último de los presupuestos referidos (N° 37207) es de fecha anterior (15 de Noviembre de 2.019) a aquel (N°49272) en que expresamente se indica que las obras están fuera de zona de concesión (12 Febrero de 2.021). **8.-** Y respecto del presupuesto N° 51333, de fecha 25 de Mayo de 2.021, si bien en él se indica expresamente en su acápite “NOTAS” que las obras están en zona de concesión, cabe señalar que dicho presupuesto no es el principal (que dice relación con las obras de electrificación del proyecto inmobiliario desarrollado por la demandante) sino que aquel decía relación con obras accesorias, básicamente las siguientes: a) instalación de una subestación aérea de 45 kVA Trifásica 23.000/400-231 V, montada en postes de concreto armado de 10 metros litoral, con su respectivo equipo de protección en media y baja tensión y, b) Construir 10 metros de Línea Media Tensión Trifásica conformada por 3 conductores de Aluminio protegido AAAC 35 mm², entre el poste de concreto armado de 10 metros proyectado y el poste N°871928 existente, tal y como se lee en el acápite 1 “DESCRIPCION DE LAS OBRAS FINANCIADAS POR SAESA” del referido presupuesto. Y ello, en razón que este último presupuesto dice relación exclusivamente con las obras que tuvieron por objeto acondicionar la estructura o poste de SAESA N°



871928, que, si se emplazaba y emplaza dentro de zona de concesión, con un transformador trifásico que era necesario para dar, desde aquel, servicio al proyecto de electrificación de loteo de la demandante. En otras palabras y como se acreditará oportunamente, el referido poste N° 871928 se encuentra en el límite del área de la concesión existente actualmente, sin embargo, el poste de 10 metros de concreto, que se indica como proyectado en el acápite 1.2 del presupuesto N° 51333, emplazado al interior del predio de la actora, y con el cual se conectó el referido poste N° 871928, de propiedad de SAESA, se ubica fuera del área de concesión, al igual que el resto de la propiedad de la sociedad demandante. Y es por esta razón que el ya referido presupuesto N° 51333, es el único de los tres que SAESA emitió en el marco de las obras de electrificación ejecutadas para la demandante, en el que se incluye un ítem relativo a las “Obras Financiadas por SAESA”, diferenciándolo de las obras de cargo del solicitante, que corresponden exclusivamente al costo de la mano de obra de dichas obras. **9.-** De lo expuesto precedentemente, aparece de manifiesto que, no existiendo concesión de distribución de energía eléctrica en el área o zona en la que se emplaza el inmueble de propiedad de la demandante (donde desarrolla el ya tantas veces mencionado proyecto inmobiliario), no opera respecto de SAESA, la obligación de dar servicio a quien lo solicite contenida en el artículo 125 de la LGSE así como tampoco las obligaciones contenidas en el artículo 139 de la LGSE relativas a empalmes y medidores, ni tampoco las obligaciones derivados del ejercicio de la facultad que tiene una empresa concesionaria, de imponer a un cliente o usuario, la suscripción de un contrato de Aporte Financiero Reembolsable. En consecuencia, no existiendo concesión de distribución de energía eléctrica en el área o zona en la que se emplaza el inmueble de propiedad de la demandante, SAESA ha intervenido en la ejecución del proyecto de electrificación realizado al interior de este último, en calidad de contratista de obras civiles eléctricas, por lo que la relación entre esta última y su mandante (actora) se rige por un acuerdo comercial privado, directo, cuyos efectos se rigen por lo dispuesto en las normas de los artículos 1545 y siguientes del Código Civil, quedando obligadas las partes a lo establecido en este último estatuto y no a lo dispuesto en la LGSE.- **B) ANTECEDENTE DE CONECTUALIZACIÓN: CALIDAD QUE DETENTAN LA EMPRESA DEMANDANTE Y SU LOTEO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN) EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN ELECTRICA NACIONAL. 1.-** Sin perjuicio de lo expuesto en el acápite precedente en el sentido que, al no haber concesión de distribución de energía eléctrica en el área o zona donde se emplaza el proyecto inmobiliario de la actora y, por ende, al no tener mi representada la calidad de empresa concesionaria de servicio público de distribución respecto de la demandante ni de las obras de electrificación que se ejecutaron al interior de su predio, circunstancia que determina que no se aplica al caso de marras, la regulación contenida en la LGSE respecto de las obligaciones impuestas a una concesionaria eléctrica en las normas que se



denuncian como infringidas, principalmente artículos 125 de la LGSE y 105 del RLGSE, cabe señalar que en dichas normas, se establece la obligación de la empresa concesionaria, de entregar servicio al interior de su zona de concesión, en las condiciones de calidad y continuidad que la propia legislación eléctrica establece, obligación que tiene con “el usuario” que lo solicite. Y para saber qué se debe entender por “usuario”, debemos recurrir a la norma del artículo 225 letra K) de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), norma que define al usuario o consumidor final, como el “Usuario que utiliza el suministro de energía eléctrica para consumirlo. 2.- Por su parte, de la lectura de la demanda de autos, aparece que la actora reconoce que en su oportunidad solicitó a SAESA, suministro eléctrico para el proyecto de parcelación denominado “Costa Terao”, ubicado en la comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos; y que corresponde a un loteo o proyecto inmobiliario de 72 hectáreas, que cuenta con 96 lotes o parcelas. 3.- De lo señalado en los numerales precedentes, aparece de manifiesto que la demandante, Inmobiliaria Costa Terao SpA., en el marco de la solicitud de electrificación referida en el libelo de autos, no ha obrado en calidad “usuario” de conformidad con lo definido por nuestra legislación eléctrica, desde que la sociedad demandante, en su calidad de desarrollador inmobiliario, en ningún momento ha solicitado a SAESA que le dé suministro (servicio) eléctrico para su consumo propio, sino que lo que ha solicitado, es la construcción de redes eléctricas, al interior de su loteo o proyecto inmobiliario, con el objeto de poder vender “urbanizados” cada uno de sus lotes, esto es, entregando la posibilidad de que los futuros compradores de dichas parcelas, pueda tener suministro eléctrico. Y, en consecuencia, como resulta evidente y aún a riesgo de resultar reiterativo, cabe señalar que el proyecto de electrificación que se refiere en el libelo, no ha tenido por objeto (su construcción) el permitir el consumo de energía eléctrica a la sociedad demandante, sino que el permitir el consumo de energía eléctrica, a los futuros compradores de cada una de las parcelas que componen el proyecto inmobiliario referidos en el libelo, lo que a su vez permite concluir, que la demandante no tiene la calidad de usuario para nuestra legislación eléctrica, en lo que respecta al proyecto de electrificación cuya construcción solicitó a mi representada, y cuyo pago constituye el objeto de las acciones deducidas en autos. Luego, difícilmente puede concurrir en la especie, la infracción que la contraria denuncia, a las normas del artículo 125 de la LGSE y artículo 105 del RLGSE. 4.- Finalmente, y una vez determinado que la demandante NO DETENTA DE LA CALIDAD DE “USUARIO”, corresponde aclarar que la empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica, NO SE ENCUENTRA OBLIGADA LEGALMENTE A FACILITAR LA URBANIZACIÓN de estos grandes proyectos inmobiliarios rurales mediante la construcción de redes eléctricas para su beneficio, sino por el contrario, la obligación se limita a suministrar energía eléctrica a los usuarios, dentro de zona de concesión y en la misma tensión que indica el correspondiente decreto de concesión.



Esta obligación de suministrar energía eléctrica se entenderá cumplida mediante la conexión a través de un empalme de la instalación eléctrica domiciliaria con las redes de distribución pertenecientes al concesionario. Según lo dispuesto por la norma técnica pertinente (Pliego Técnico Normativo RIC 1), el empalme corresponde a un conjunto de elementos que conecta el medidor del usuario a la red de distribución, y aquel (medidor) debe cumplir con requisitos básicos, uno de los cuales se refiere a su ubicación, respecto de la cual se indica: 7.2 Para construcciones habitacionales unifamiliares u otro tipo de recintos, conectados a través de un empalme único, la unidad de medida de éste deberá ubicarse en la fachada principal de la vivienda, con vista frontal desde la vía pública de acceso, permitiendo una fácil lectura desde el exterior de la propiedad e impidiéndose su manipulación por terceros, y dentro de un semicírculo de radio no superior a 15 m, con centro en la puerta de acceso desde la vía pública al punto de medición. Ver anexo 1.1 7.3 Las unidades de medida se montarán en la fachada exterior de la edificación si ésta queda dentro de la zona delimitada; en caso contrario, se ubicarán en un punto próximo a la línea de cierre, cumpliendo la exigencia establecida, y se montarán en una estructura construida o instalada exclusivamente para este propósito. Ver anexo 1.1

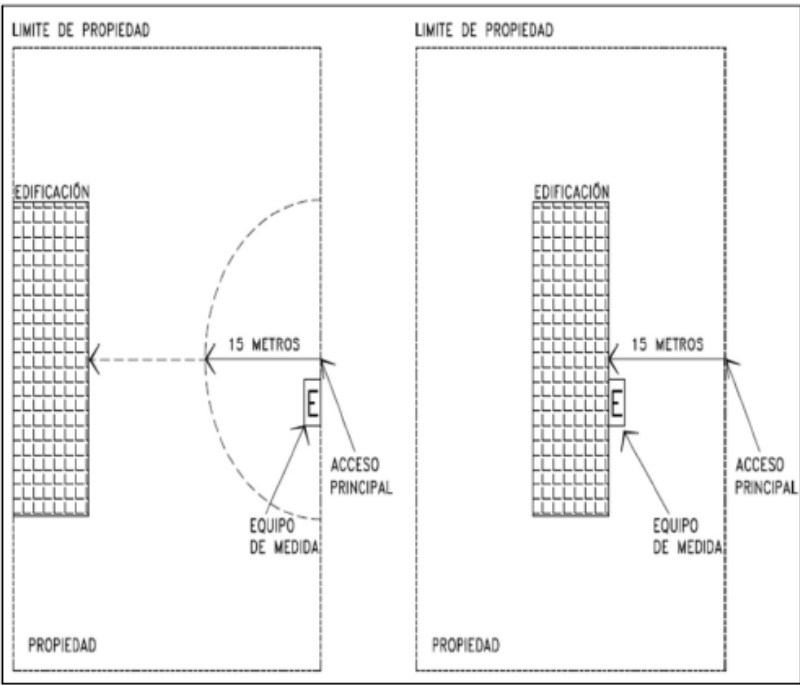


Imagen correspondiente a Anexo 1.1 de Pliego Técnico Normativo RIC 01.

Por lo expuesto, la demandante erróneamente asimila su situación con la de un usuario final de servicio eléctrico (tengamos en cuenta que se trata de una inmobiliaria dueña de un Proyecto de Loteo), e intenta sostener que la construcción de un proyecto eléctrico en zona rural que incluye la instalación de 3 subestaciones aéreas de 45 kVA Trifásica; 1 subestación aérea de 15 kVA Trifásica, la construcción de 1.067 metros de Línea Media Tensión Trifásica y de 2523 metros de Línea Baja Tensión Trifásica así como la construcción de 497 metros de Línea Baja Tensión monofásica, se asimilaría a las



obras de conexión de un empalme eléctrico, lo cual no guarda relación alguna con lo que efectivamente regula nuestra legislación eléctrica. Frente a ello, se hace necesario reiterar que las empresas distribuidoras no están obligadas a participar en la urbanización de loteos particulares, sino que su obligación es la de suministrar energía eléctrica a clientes que requieren dicho servicio, lo que no ocurrió en los hechos en que funda su acción la demandante, atendido que la solicitud dice relación netamente con la electrificación de un loteo o urbanización del mismo. **C) INCONCURRENCIA EN LOS HECHOS DE MARRAS, DE LA FIGURA DEL APOORTE FINANCIERO REEMBOLSABLE. 1.-** Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en el sentido que, al no haber concesión de distribución de energía eléctrica en el área o zona donde se emplaza el proyecto inmobiliario de la actora y, por ende, al no tener mi representada la calidad de empresa concesionaria de servicio público de distribución respecto de la demandante ni de las obras de electrificación que se ejecutaron al interior de su predio, circunstancia que determina que no se aplica al caso de marras, la regulación contenida en la LGSE relativa a la figura del Aporte Financiero Reembolsable (AFR); igualmente habría correspondido –en el supuesto de haber tenido mi representada la calidad de concesionaria del servicio público de distribución en el área donde se emplaza predio del actor- rechazar la pretensión de esta última, de declarar que, en la especie, se configuran los requisitos de la figura del AFR, por los motivos que paso a exponer: **A.-** Como cuestión previa y para un mejor entendimiento de la naturaleza y objeto de la figura del AFR, cabe señalar que, dado que la distribución de energía eléctrica es un servicio público (art. 7 LGSE) sometido a un monopolio natural por medio de concesiones y que sobre el concesionario pesa la obligatoriedad de suministrar energía (art. 125 LGSE) a cualquier usuario dispuesto a pagar su tarifa (en caso de que se niegue a dicho suministro, sin causas justificadas, se expone a sanciones), el contrato de AFR se erige como una excepción a dicho principio de obligatoriedad (de entregar suministro a todo quien lo solicite dentro de su zona de concesión). **B.-** En efecto, es posible señalar que en el ámbito de la distribución de energía los AFR se manifiestan en un negocio jurídico o contrato, por medio del cual una persona (usuario o cliente) se obliga, por su parte, a entregar a una empresa concesionaria una suma de dinero o, en su caso, a desarrollar obras certificadas, con la finalidad de obtener la prestación del servicio en una potencia superior o para la ampliación necesaria de éste; y, la empresa concesionaria se obliga, por su parte, a restituir lo invertido por el aportante en la forma y plazo acordados, los cuales están determinados en la ley y reglamentación. (arts. 126 a 129 LGSE). De ahí que el contrato de AFR es una prerrogativa o derecho del concesionario de distribución de energía. En efecto, el concesionario podrá solicitar el aporte, dentro de su zona de concesión como también boleta de garantía a quien requiera una potencia superior o una extensión de sus redes a lugares donde no estaba llegando; pues, la concesionaria busca financiamiento para los



costos económicos de cumplir con su obligación de suministro continuo y de calidad. Cabe señalar que, las empresas de distribución de energía deben hacer un análisis económico interno antes de exigir el AFR, ya sea frente a una solicitud de extensión de sus redes o de aumento de potencia. En efecto, podrán evaluar si optan por un financiamiento obtenido en el Mercado de Capitales con un reajuste e interés de común ocurrencia bancaria; o, si optan por solicitar el financiamiento inmediato al requirente de obras o de extensión, con los reajustes e intereses que define la normativa eléctrica y que deben hacerse efectivo en un reembolso real. **C.- MARCO REGULATORIO DE LOS CONTRATOS DE AFR.**

Los contratos de AFR están regulados directamente en la Ley General de Servicios Eléctricos o LGSE (actualmente refundida, coordinada y sistematizada en el DFL N° 4/20.018, de fecha 05.02.2007) y en el Reglamento de ese cuerpo legal (DS N° 327, de 1998). Además, estos contratos están regulados indirectamente por la Ley Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Ley N° 18.410 de 1985). i) Regulación directa de los contratos de AFR. En los artículos 124 a 129 del Título IV denominado “De la explotación de los servicios eléctricos y suministro” de la Ley General de Servicios Eléctricos, se regulan los contratos de AFR como una excepción al principio de obligatoriedad de suministro. Su regulación reglamentaria consta en los artículos 136 a 144 del Título III denominado “Relaciones entre propietarios de instalaciones eléctricas, clientes y autoridad”, más específicamente en el Capítulo V: “Garantías y aportes reembolsables”, del Reglamento de la Ley General de Servicio Eléctricos. ii) Regulación indirecta de los contratos de AFR. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por su parte, podrá intervenir en ciertos aspectos de este contrato de AFR y antes de su suscripción, conforme a los arts. 2° y 3 números 17, 34 y 36 de la Ley N° 18.410, de 1985. **D.-**

#### **CARACTERÍSTICAS, TIPOS, PARTES Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE AFR DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA.**

Desde la óptica del Derecho civil y de la regulación del sector eléctrico los contratos de AFR presentan características, tipos, partes y los elementos del contrato de AFR que puede suscribir una empresa de distribución de energía eléctrica. a.- Las características de este contrato de AFR. Dado que es un acto o negocio jurídico que se suscribe entre la empresa distribuidora de energía y el usuario o cliente, conforme al derecho común aplicable a todo contrato, es posible señalar que este contrato presente las siguientes características: i) Es bilateral, suscrito por dos partes; Es facultativo para la empresa y es forzoso para el usuario o cliente (criterio validado por la CA Santiago, 20.10.1993, Rol N° 2.527-1997, considerando 10); iii) Es de adhesión, dado que es redactado por la empresa y el aportante debe aceptar su contenido; iv) Es dirigido y nominado o típico, dado que la ley lo reconoce e impone sus términos esenciales, así como los aspectos que pueden variar por la naturaleza del contrato; v) Es oneroso, dado que beneficia a las dos partes; vi) Es conmutativo, dado que las prestaciones de las partes son



equivalentes; vii) Es acto jurídico complejo y accesorio al contrato de suministro; viii) Es un título traslativo de dominio, de los aportes en favor de la concesionaria. b.- Los tipos de contrato de AFR. Según la normativa del sector eléctrico se observa que hay tres tipos de contrato de AFR que tiene cuya suscripción tiene derecho a exigir una concesionaria de distribución, según la petición que se le formule por el usuario o cliente; a saber: i) Por petición del Alcalde de canalización subterránea de sus líneas (art. 124 inc. 1° LGSE), en aquel caso la empresa concesionaria podrá exigir el aporte al Municipio y bajo la hipótesis de que el Alcalde haya decretado que se deben soterrar las líneas de distribución; ii) Por solicitud de otorgamiento de suministro o ampliación de potencia (arts. 126 LGSE y 136 letra a) y 137 del Reglamento LGSE), caso en el cual el aporte estará limitado a lo necesario para la ejecución de las ampliaciones de capacidad en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que se requieran a consecuencia de la solicitud del usuario. Y si la potencia solicitada o ampliada supera los 10 kilowatts, la empresa podrá exigir, adicionalmente al aporte reembolsable, una garantía suficiente para caucionar que la potencia solicitada será usada por el tiempo adecuado. iii) Por solicitud de extensión de obras hasta el punto de empalme del peticionario (arts. 127 LGSE, 136 letra b) y 138 del Reglamento de la LGSE), en aquel caso la empresa concesionaria podrá exigir el aporte para llegar con las instalaciones, en el marco de su zona de concesión, a lugares no previsto en su operación. Las obras se podrán hacer, de dos maneras, a saber: 1°) Construidas directamente por el interesado, a través de un profesional certificado, previa valoración y autorización de la empresa concesionaria; o, 2°) Por la propia empresa concesionaria, previo financiamiento del aportante. c.- Las partes de este contrato de AFR. Son: (i) la empresa de distribución; y, (ii) el aportante, que es el cliente o usuario de las instalaciones -ya sea que por primera vez requiere del servicio o requiere de nuevos servicios complementarios o en otras condiciones.- d.- Los elementos del contrato AFR. En síntesis, son: i) El aporte del usuario y cliente, el cual no tiene un monto máximo y se determina en función de la valoración de obras que se requieren estrictamente para la canalización de redes, mayor potencia o extensión de redes hasta el punto de empalme (por ejemplo, el art. 129 LGSE establece que no se deben hacer cobros por gastos que signifique el reembolso). ii) El desarrollo de la obra, la cual se limita sólo a la canalización de línea o a la ampliación de potencia o la extensión de las redes hasta el empalme. iii) Existencia de reembolso, que podrá ser en dinero, documentos mercantiles, suministro eléctrico, acciones comunes de primera emisión de la propia empresa, acciones que haya entregado otra empresa como AFR o cualquier otro mecanismo; pero, lo que importa es que sea un reembolso real (arts. 128 LGSE y 141 Reglamento LGSE), con interés (tasa de descuento determinada en el estudio de tasación de obras de 2020-2024 -arts. 182 bis y 13° transitorio de LGSE -) y reajuste. D) **DE LA INEXISTENCIA DE UN PAGO DE LO NO DEBIDO. 1.-** Sin perjuicio de todo lo expuesto



precedentemente, y que permite concluir que SAESA no tiene la obligación de reembolsar los pagos a ella efectuados por la demandante, desde que en la especie ese pago no constituyó un aporte financiero reembolsable sino que se refieren a obras al interior del predio de la demandante que fueron contratadas directamente a mi representada bajo condiciones comerciales claras y manifiestas, cabe igualmente desestimar el argumento subsidiario de la actora, en el sentido que, en la especie, se configura el cuasicontrato del pago de lo no debido, por las razones que se exponen a continuación. **2.-** En primer lugar, cabe hacer presente que la demandante ocupa los numerales 8 al 13 del acápite II de su libelo, para transcribir las normas del Código Civil que regulan la figura del cuasicontrato del pago de lo no debido; sin embargo, en parte alguna señala ni menos desarrolla, los argumentos por los cuales estima serían aplicable a los hechos de marras, la figura del pago de lo no debido. **3.-** En efecto, de la lectura del libelo, aparece de manifiesto que la actora no solo no denuncia haber efectuado los referidos pagos a SAESA, motivada por un error, sino que ni siquiera entrega argumentos que permitan inferir si realmente aquella incurrió o no en un falso juicio respecto de los hechos y de las normas de derecho que refiere en su libelo. **4.-** Sin perjuicio de lo anterior, y de los propios antecedentes aportados por la actora a su demanda, aparece de manifiesto que aquella nunca incurrió en un error (falso juicio o concepto de la realidad ni del derecho) al momento de aceptar el presupuesto que SAESA le remitió a raíz de sus solicitudes de electrificación. De hecho, basta con leer las extensas condiciones que se contenían en los presupuestos N°37207 de fecha 15.11.19; N°49272 de fecha 12.02.21, y N°51333 de fecha 25.05.21, como para darse cuenta que resultaba difícil, por no decir imposible, que alguien en su sano juicio, pudiera entender que los valores que se les estaban cobrando, iban a ser devueltos o reembolsados, con posterioridad. Es más, es tal la claridad de las condiciones que se expusieron en el presupuesto mencionado, que la pretensión de reembolso de la actora solo puede entenderse como una actuación de mala fe, donde aquella pretende aprovecharse de una relación comercial que fue plenamente conocida y consentida en cuanto a sus términos y condiciones. ¿Acaso supone la demandante que las obras civiles eléctricas descritas en los 3 presupuestos antes referidos, debían ser una especie de aporte o regalo de mi representada? Y al parecer eso es lo que supone la actora, desde que en su libelo señala, dentro del escueto desarrollo de esta acción, que la obligación de devolver lo pagado se genera del hecho voluntario que consiste en recibir el pago sin que exista una obligación que le sirva de fundamento. **E) CONSIDERACIONES EN CUANTO A ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA. 1.-** De la lectura de los párrafos 5 y 6 del acápite I (Fundamentos de Hecho) del libelo de marras, aparece que en ellos se contienen, sin sentido procesal alguno, las siguientes expresiones: a) “Una vez finalizadas las obras eléctricas necesarias para dar suministro eléctrico, SAESA exigió a mi representada la transferencia de las instalaciones



construidas (...) solicitando que fueran firmadas y entregadas por mi representada como requisito previo para la conexión del loteo, lo que esta parte cumplió con fecha 01.12.21.” b) “De este modo, SAESA obtuvo de mi representada el financiamiento necesario para la ejecución de las obras eléctricas, y luego de ello, se hizo dueña de las instalaciones eléctricas construidas por ella misma, conforme con un proyecto confeccionado por SAESA.” **2.-** Y se indicó más arriba que estas expresiones habían sido vertidas por la actora en su libelo, sin sentido procesal alguno, desde que aquella no denunció formalmente un supuesto vicio del consentimiento al momento de suscribir el contrato de transferencia de instalaciones eléctricas que refiere en su libelo (y cuya copia acompaña a este último), concretamente, el haber sido víctima de actos materiales o amenazas por parte de mi representada, para inducirla a consentir en la suscripción del mentado contrato de transferencia de instalaciones eléctricas; ni tampoco dedujo acción tendiente a obtener la invalidación del mentado contrato de transferencia de instalaciones eléctricas, por la existencia de un vicio del consentimiento, concretamente, de fuerza. Y de hecho, de la lectura del acápite del derecho, no se denuncia como infringido ninguna de las normas del Código Civil que regulan los vicios del consentimiento (artículos 1451 y siguientes); ni tampoco se sustentan las dos acciones ejercidas en estos autos, a saber, principal de reembolso y subsidiaria de pago de lo no debido, en la existencia de esta supuesta fuerza de que habría sido víctima la actora. **3.-** Finalmente, y sin intención de justificar lo que no corresponde, simplemente hacer presente a SS., que los motivos que estuvieron detrás de la transferencia de las instalaciones eléctricas construidas al interior del predio de la actora, se encuentran contenidas en el propio contrato de transferencia, específicamente en su cláusula tercera, relativa a las obligaciones del adquirente, y que se resumen en la obligación de mi representada, de asumir la mantención (costo y mano de obra) de las instalaciones y equipos que en el mismo contrato se detallan (a modo ejemplar, mantenimiento, reparación o reemplazo de transformadores, reconexión de fusibles aéreos en caso de caída de una rama sobre tendido eléctrico, que interrumpa el suministro por activación de las protecciones de la red, reemplazo de postes eléctricos en caso de fractura, reemplazo de líneas eléctricas en caso de corte de las mismas, entre otras); labores de mantenimiento y costos de las mismas, que de no haber mediado transferencia de las mentadas instalaciones eléctricas, tendrían que haber sido asumidas por la sociedad demandada. **F) INCONGRUENCIA DE LAS SUMAS CUYO REEMBOLSO SE SOLICITA. 1.-** De la lectura del literal b) del petitorio de la demanda de autos, se lee, textual: “b) Que, en consecuencia, se condena a se condena a SAESA a reembolsar a mi representada, la suma de 2.789,1 UF, más el valor recargado por concepto de IVA, junto con el pago de intereses corrientes, devengados desde la fecha de recepción del pago por parte de la demandada, y hasta la fecha de reembolso efectivo, o la suma que US., estime que en Derecho corresponde conforme con la ley y el



mérito del proceso;”.- **2.-** Como SS., podrá observar, la actora solicita en primer término al interponer su demanda, que se condene, al pago de una suma expresada en Unidades de Fomento, más intereses corrientes y más el valor recargado por concepto de IVA. **3.-** Como primera cuestión, cabe señalar que el actor señala falsamente en los párrafos 3 y 4 de su demanda (acápite I de los Fundamentos de Hecho) que las facturas que mencionada, a saber, números 6316044, 6850253 y 6850252, estén expresadas en Unidades de Fomento. Por el contrario, y como resulta más que evidente de su lectura, dichas facturas se encuentran expresadas en pesos, y lo único que se expresó en Unidades de Fomento, son los 3 presupuestos que la contraria refiere en su libelo. Sin embargo, esta última, mañosamente confunde ambas cosas, para tratar de justificar un cobro expresado en Unidades de Fomento. **4.-** Como segunda cuestión, cabe señalar que resulta del todo improcedente que se demande el pago o reembolso de una suma expresada en Unidades de Fomento, desde que la propia actora reconoce en su libelo que los pagos que efectuó a mi representada, lo fueron en pesos. Y de hecho, si se suman los pagos efectuados por la demandante, vinculados a cada una de las 3 facturas que esta misma acompañó a su demanda, aparece que esos 3 pagos totalizan la suma neta de \$83.826.987 (\$99.754.113 IVA incluido), suma que no guarda relación alguna con los \$100.363.476 (neto), que resultan de multiplicar la suma expresa en UF en el petitorio (2.789,1) por el valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda (\$35.984,18), resultando una diferencia o exceso de cobro que asciende a los \$16.536.489 (neto), los que no tienen justificación alguna, y que deja además de manifiesto que no existe concordancia entre lo que se pide en la demanda y los antecedentes que sirven de fundamento a lo pedido. **5.-** En otras palabras, el actor, aprovechándose que, en su oportunidad, los presupuestos que recibió por lo proyectos de electrificación que se ejecutaron en su propiedad, venían expresados en Unidades de Fomento, pretende ahora que dichos dineros le sean reembolsados, años después, en la misma unidad de reajustabilidad (UF), lo que carece de todo sentido y justificación. Por tanto, ruego a US., se sirva tener por contestada la demanda de autos, intentada por INMOBILIARIA COSTA TERA O SPA, en contra de mi representada Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA; solicitando se sirva rechazarla, en todas sus partes, por ser manifiestamente infundada, con costas.

La parte demandante replicó solicitando el rechazo de las excepciones y defensas opuestas por la contraparte en su escrito de contestación, sobre la base de los argumentos de hecho y de Derecho expuestos en la demanda, todos los cuales doy por expresa e íntegramente reproducidos, por razones de economía procesal, y teniendo presente, además, los siguientes argumentos complementarios: **I.- HECHOS RECONOCIDOS POR LA DEMANDADA.** **1.** La demandada, en primer lugar, NO controvierte la



efectividad de los pagos, ni los montos pagados por mi representada, en relación con las instalaciones eléctricas, necesarias para la distribución de energía eléctrica, que fueron financiadas por mi representada. 2. La demandada, en segundo lugar, NO controvierte haber recibido, a su favor, la transferencia las instalaciones eléctricas, necesarias para la distribución de energía eléctrica, que fueron financiadas por mi representada. **II.- EXCEPCIONES OPUESTAS POR LA DEMANDADA. A) En cuanto a la calidad de concesionaria de servicio público.** 1. La demandada, en primer lugar, señala en su contestación no ser concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica en el sector de Terao, comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos. 2. Sobre el particular hemos de reafirmar que la demandada SÍ es concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, y por ende lo señalado a US es falso, y así se demostrará en la etapa procesal respectiva. 3. De hecho, solicitó a mi representada la transferencia de instalaciones eléctricas, precisamente con el fin de explotarlas, otorgando suministro eléctrico. **B) En cuanto a la normativa legal aplicable.** 4. La demandada sabe que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante simplemente “SEC”, tiene la potestad de interpretar, auténticamente, la normativa eléctrica, conforme con lo prescrito por el artículo 3 N°34 de la Ley 18.410, Ley Orgánica de SEC. 5. En efecto, de acuerdo con la norma jurídica precitada es facultad exclusiva de SEC “Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización”. 6. Y ocurre US., que la demandada sabe que SEC ya ha interpretado la normativa eléctrica en esta materia, y ha dicho que existe AFR cuando se reúnen los requisitos legales, y no cuando lo decide o define la concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica. Así se demostrará en la etapa procesal respectiva. 7. Del mismo modo, SEC ha definido sobre la materia, con efecto vinculante: a) Que la empresa eléctrica concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica tiene la obligación de dar suministro eléctrico en su zona de concesión; b) Que la obligación de dar suministro se traduce en la obligatoriedad de asumir el costo de las obras necesarias para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica, lo que implica, obviamente, materiales y mano de obra. c) Que, para los efectos de lo anterior, no es relevante si se trata de un usuario individual o de un desarrollador inmobiliario (loteador o urbanizador). d) Que, de este modo, si el costo de las obras necesarias para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica, fueron asumidas o financiadas por un usuario individual o un desarrollador inmobiliario (loteador o urbanizador), sobre la base de un proyecto eléctrico aprobado por la concesionaria, sólo se puede concluir que se está ante la figura del AFR, regulado en la **LGSE, por ende, la concesionaria tiene la obligación de restituir el costo de las obras necesarias para prestar el servicio de distribución de**



**energía eléctrica.** e) Que el modelo tarifario fijado por la regulación eléctrica establece que las concesionarias de servicio público de distribución de energía eléctrica financian su infraestructura mediante las tarifas eléctricas, reconociéndoles sus instalaciones al momento de reconocer la demanda que se debe cubrir dentro de su área de concesión, de esta manera, las concesionarias no pueden cobrar a los usuarios ubicados en sus zonas de concesión por las extensiones o ampliación de redes para otorgar suministro eléctrico a un punto de consumos, toda vez que se generaría un doble ingreso para las empresas que ejecutan el servicio público. **f)** Que para la regulación eléctrica el único caso en que es lícita la exigencia de dineros a los usuarios finales para la construcción de obras de distribución de energía eléctrica es el mecanismo del AFR, de modo tal que si existe un cobro y no corresponde a un AFR el pago carece de causa y se debe restituir lo cobrado. **g)** Que el mecanismo de AFR es una institución de orden público de la LGSE, por ende, la empresa concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica tiene la prohibición de celebrar contratos de construcción de redes de distribución u otros actos de cualquier naturaleza para evadir su cumplimiento. De lo contrario, el acto jurídico de que se trate carece de causa y objeto, y atenta contra el Derecho Público chileno. Por tanto, tener por evacuado el trámite de la réplica y conferir traslado para la dúplica.

La parte demandada expuso: Estando dentro de plazo, vengo en evacuar el trámite de dúplica, en los siguientes términos: **I.- EN CUANTO A LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN EL ACÁPITE I DEL ESCRITO DE REPLICA (HECHOS RECONOCIDOS POR LA DEMANDADA).** 1. La actora sostiene en los párrafos 1 y 2 de su escrito de réplica, que esta parte no habría controvertido, por una parte, “la efectividad de los pagos, ni los montos pagados por mi representada, en relación con las instalaciones eléctricas, necesarias para la distribución de energía eléctrica, que fueron financiadas por mi representada; y por otra, sostiene que tampoco se habría controvertido por esta parte, “el hecho de haber recibido, a su favor, la transferencia las instalaciones eléctricas, necesarias para la distribución de energía eléctrica, que fueron financiadas por mi representada”. 2. Si bien es efectivo que esta parte reconoce en su contestación de demanda los pagos efectuados por la sociedad demandada, en relación a las obras de electrificación ejecutadas por mi representada al interior del predio de la actora, en el que desarrolló un loteo o proyecto inmobiliario, no es efectiva que se esta parte haya reconocido que dichas obras de electrificación hayan sido necesarias para la distribución de la energía eléctrica, toda vez que tal como señalamos en el contestación de la demanda, se trató de la construcción de obras particulares (urbanización de un loteo) ubicadas fuera de zona de concesión eléctrica, no correspondiendo en ningún caso las mismas, a una extensión de redes o de líneas eléctricas obligatorias para SAESA. 3. Por su parte, si bien es efectivo a su vez que esta parte reconoció el



hecho de haber recibido en transferencia la propiedad de las instalaciones eléctricas existentes al interior del predio de la actora, nunca sostuvo que esa transferencia haya sido necesaria para la distribución de la energía eléctrica, salvo en lo que respecta a las instalaciones existentes al interior del predio de la demandada. Y sin perjuicio de lo anterior, cabe reiterar en este punto que los motivos que estuvieron detrás de la transferencia de las instalaciones eléctricas construidas al interior del predio de la actora, se encuentran contenidas en el propio contrato de transferencia, específicamente en su cláusula tercera, relativa a las obligaciones del adquirente, y que se resumen en la obligación de mi representada, de asumir la mantención (costo y mano de obra) de las instalaciones y equipos que en el mismo contrato se detallan (a modo ejemplar, mantenimiento, reparación o reemplazo de transformadores, reconexión de fusibles aéreos en caso de caída de una rama sobre tendido eléctrico, que interrumpa el suministro por activación de las protecciones de la red, reemplazo de postes eléctricos en caso de fractura, reemplazo de líneas eléctricas en caso de corte de las mismas, entre otras); labores de mantenimiento y costos de las mismas, que de no haber mediado transferencia de las mentadas instalaciones eléctricas, tendrían que haber sido asumidas por la sociedad demandada. **4.** Pareciera que el demandante hábilmente pretende hacer creer a US, que realizar obras necesarias para la distribución eléctrica, es un sinónimo de obligación para SAESA, es decir, si las obras permiten la distribución eléctrica deben ser ejecutadas por SAESA, olvidando que la legislación eléctrica, limita expresamente dicha obligación - otorgar suministro eléctrico - a que este se solicite dentro de la zona de concesión. **II. EN CUANTO A LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN EL ACÁPITE II DEL ESCRITO DE REPLICA (EXCEPCIONES OPUESTAS POR LA DEMANDADA).** **1.** En primer lugar, en el literal A) del mencionado acápite II, en relación con “la calidad de concesionaria de servicio público, la demandante se limita a señalar que esta parte sostuvo en su contestación no ser concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica en el sector de Terao, comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé, agregando sin más que dicha afirmación sería falsa, lo que se demostraría en la etapa procesal correspondiente. Finalmente, agrega en el párrafo 3 de su réplica que, mi representada le habría solicitado la transferencia de instalaciones eléctricas, precisamente con el fin de explotarlas, otorgando suministro eléctrico. **2.** A este respecto debe tenerse en consideración que: **a.** Efectivamente, Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA, no cuenta actualmente ni contaba a la fecha en que ejecutó las obras de electrificación en el predio de la demandante, con concesión de distribución de energía eléctrica, en el lugar donde se emplaza el proyecto inmobiliario que desarrolla la empresa demandante, ubicado en sector Terao, de la Comuna de Chonchi. **b.** La situación anterior (inexistencia de concesión de distribución de energía eléctrica), estaba en pleno conocimiento de la empresa demandante, desde que en el mismo presupuesto que aquella refiere en su libelo y que acompaña a



este último, a saber, presupuesto N° 49272, se puede leer claramente en su página 1, en el acápite “NOTAS”: “1.- Obra fuera de zona de concesión”. c. Las empresas que prestan el servicio público de distribución de energía eléctrica, en su zona de concesión están obligadas a dar servicio a quien lo solicite (arts. 7 y 125 LGSE). A contrario sensu, dicha obligación no existe respecto de usuarios que están fuera de la zona de concesión. Respecto de estos últimos pueden existir, no obstante, convenios libremente celebrados, dirigidos al objetivo de prestar el servicio más allá de la zona de concesión, dado que ello se infiere de los arts. 125 y ss., de la LGSE. En estos últimos casos, las empresas eléctricas prestadoras del servicio público de distribución suelen celebrar convenios, los que quedan sujetos a la libre autonomía de los contratantes y los que se encuentran regidos por el Código Civil. d. De lo expuesto precedentemente, aparece de manifiesto que, no existiendo concesión de distribución de energía eléctrica en el área o zona en la que se emplaza el inmueble de propiedad de la demandante (donde desarrolla el mencionado proyecto inmobiliario), no opera respecto de SAESA, la obligación de dar servicio a quien lo solicite contenida en el artículo 125 de la LGSE así como tampoco las obligaciones contenidas en el artículo 139 de la LGSE relativas a empalmes y medidores, ni tampoco las obligaciones derivados del ejercicio de la facultad que tiene una empresa concesionaria, de imponer a un cliente o usuario, la suscripción de un contrato de Aporte Financiero Reembolsable. d. En consecuencia, no existiendo concesión de distribución de energía eléctrica en el área o zona en la que se emplaza el inmueble de propiedad de la demandante, SAESA ha intervenido en la ejecución del proyecto de electrificación realizado al interior de este último, en calidad de contratista de obras civiles eléctricas, por lo que la relación entre esta última y su mandante (actora) se rige por un acuerdo comercial privado, directo, cuyos efectos se rigen por lo dispuesto en las normas de los artículos 1.545 y siguientes del Código Civil, quedando obligadas las partes a lo establecido en este último estatuto y no a lo dispuesto en la LGSE. 2. Luego, en el literal B) del acápite II del escrito de réplica, en relación con “Normativa Legal Aplicable”, la demandante se limita a señalar cual sería, supuestamente, la interpretación que de la figura del Aporte Financiero Reembolsable (AFR) ha efectuado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y, en este punto, llama la atención la redacción del párrafo 6 del escrito de réplica, en la que la actora sostiene: “Y ocurre US., que la demandada sabe que SEC ya ha interpretado la normativa eléctrica en esta materia, y ha dicho que existe AFR cuando se reúnen los requisitos legales, y no cuando lo decide o define la concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica”. Y surge naturalmente la pregunta: ¿Cómo puede saber la demandada, una empresa del rubro inmobiliario local, lo que mi representada (o mejor dichos sus ejecutivos) puedan saber o conocer sobre interpretación que la SEC haya hecho sobre los AFR? Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente en este punto, lo siguiente: a) La



actora, replicando el contenido de la contestación de demanda, en lo relativo a la normativa aplicable en la especie, se limita a hacer referencia a una supuesta interpretación que del contrato de AFR habría efectuado la SEC; sin embargo, no entrega información adicional alguna, como sería el número de oficio u ordinario que contenga esa supuesta interpretación. **b)** Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en el sentido que en el sector donde se emplaza el predio de la demandante, SAESA no cuenta con concesión de distribución de energía eléctrica, lo que por sí descarta la posibilidad de que haya podido generarse la figura del AFR, esta última tampoco habría procedido de haberse encontrado el predio de la actora dentro de zona de concesión, desde que éste es un derecho facultativo y exclusivo de las concesionarias de servicio público de distribución de energía eléctrica como contrapartida a su obligación de extender sus redes dentro de su zona de concesión en la misma tensión de su concesión para dar suministro a los clientes o usuarios finales que le soliciten servicio, y que se encuentran dentro de su zona o se conecten a través de líneas propias o terceros. En efecto las obras presupuestadas a la demandante, aceptadas por éstas, debidamente ejecutadas y pagadas por la demandante dicen relación con la construcción de obras de electrificación en un proyecto inmobiliario, por lo que forzosamente resulta concluir que ni por la naturaleza de las obras ni por la intención de mi representada nunca se pactó ni menos suscribió entre las partes del presente juicio un contrato de aporte financiero reembolsable, y a mayor abundamiento, se debe tener presente respecto de la intervención de la SEC en esta materia, lo siguiente: **i.-** En el ámbito del contrato de aportes financieros reembolsables, si bien la SEC no forma parte integrante del mismo, puede llegar a intervenir solo respecto de uno de sus elementos esenciales: en la determinación del reembolso real que debe efectuar la empresa al aportante. **ii.-** Los límites de esta intervención de la Superintendencia en el contrato de aportes financieros nos los da la ley eléctrica y su reglamento respectivo: **a.-** Artículo 128 de la LGSE que dispone que la elección de la forma de devolución corresponderá a la empresa concesionaria, pero el aportante podrá oponerse a ella cuando la devolución propuesta por la empresa no le significare un reembolso real. Si no hubiere acuerdo resolverá la Superintendencia, oyendo a las partes. **b.-** Por su parte, el artículo 144 del D.S. N° 327 de 1.997 del Ministerio de Minería (que fija el Reglamento de la LGSE) dispone: “El aportante tendrá derecho a oponerse a la forma de devolución propuesta por la empresa y a reclamar la intervención de la Superintendencia, siempre que dicha devolución no le signifique un reembolso real”. **iii.-** En materia de AFR, la ley eléctrica le otorga a la SEC facultades jurisdiccionales, las cuales podrá ejercer sólo en virtud de reclamo realizado por el aportante; por lo tanto, nunca intervendrá de oficio. **iv.-** Múltiples resoluciones de la SEC en que esta última ha excedido sus facultades en materia de contratos de AFR, han sido revisadas por los Tribunales Ordinarios de Justicia, principalmente a través de Recursos de Protección, quienes han hecho primar el



principio de la intangibilidad de los contratos, en base al artículo 1.545 del Código Civil, que dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Siguiendo con esta idea, una vez perfeccionado el contrato de aportes financieros, sin que haya reclamo del aportante, los derechos y obligaciones que de él emanan se incorporan al patrimonio de las partes, respecto de los cuales, también existe derecho de propiedad (artículo 583 del Código Civil).

**v.-** Los tribunales superiores de justicia han determinado reiteradamente que, la potestad de la Superintendencia para pronunciarse sobre esta materia (AFR) es pertinente sólo hasta antes de perfeccionarse el acuerdo de voluntades (es decir, hasta antes de la suscripción del mentado contrato de AFR). Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en sentencia de nuestra Excma. Corte Suprema, que sienta la siguiente doctrina respecto de la Resolución de la S.E.C. que ordena modificar un contrato de A.F.R. legalmente celebrado por las partes, estableciendo una nueva forma de devolución, vía administrativa, fundándose en la facultad que le confiere el artículo 77 del D.F.L. N° 1/82 (actual art. 128 de la LGSE): “Es arbitraria e ilegal la orden de modificar un contrato sobre devolución de aportes financieros, respecto de la forma en que se debían devolver los aportes de que se trata, ya que el contrato de suministro eléctrico entre las partes, en el cual se establecía la forma de devolución de los aportes, fue aceptado por las partes y la intervención de la recurrida está autorizada en caso de desacuerdo. (Considerando 9° fallo de protección)”. **vi.-** En otra sentencia, la Corte Suprema, conociendo de un Recurso de Casación en el Fondo, delimita las atribuciones de la Superintendencia y establece la siguiente doctrina: “La Superintendencia de Electricidad y Combustibles no tiene competencia para decidir si una cláusula de un contrato, que se celebró entre un particular y una empresa concesionaria de servicio público, era contraria al ordenamiento jurídico. Su competencia se encuentra supeditada a los reclamos relacionados con los asuntos que por disposición legal o reglamentaria debe inspeccionar, supervisar o verificar”.

**3.-** A su vez, de la lectura del escrito de réplica, aparece que la demandante no se hace cargo de manera alguna de la alegación o defensa relativa a la inexistencia en la especie, de un pago de lo no debido, ni de aquella relativa a la incongruencia existente respecto de las sumas cuyo reembolso se solicita. Es decir, la demandante no controvierte: **a.-** Los pagos efectuados por la actora a SAESA, de las 3 facturas individualizadas en el libelo, no fueron motivados por un error; **b.-** La demandante nunca incurrió en un error (falso juicio o concepto de la realidad ni del derecho) al momento de aceptar el presupuesto que SAESA le remitió a raíz de sus solicitudes de electrificación; **c.-** La pretensión de reembolso de la actora solo puede entenderse como una actuación de mala fe, donde aquella pretende aprovecharse de una relación comercial que fue plenamente conocida y consentida en cuanto a sus términos y condiciones. **d.-** Las facturas números 6316044, 6850253 y 6850252, referidas en el libelo, se encuentran



expresadas en pesos y no en Unidades de Fomento, como falsamente se indica en esta última. **e.-** Resulta del todo improcedente que se demande el pago o reembolso de una suma expresada en Unidades de Fomento, desde que la propia actora reconoce en su libelo que los pagos que efectuó a mi representada, lo fueron en pesos. **f.-** Existe una diferencia o exceso de cobro que asciende a los \$16.536.489 (neto), que no tienen justificación alguna, diferencia que se genera entre el valor total de las 3 facturas referidas en el libelo (\$83.826.987 neto) y los 100.363.476 (neto) que resultan de multiplicar la suma expresa en UF en el petitorio (2.789,1) por el valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda (\$35.984,18). **4.-** Finalmente y sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, cabe reiterar que: **a)** La demandante, Inmobiliaria Costa Terao SpA., en el marco de la solicitud de electrificación referida en el libelo de autos, no ha obrado en calidad “usuario” de conformidad con lo definido por nuestra legislación eléctrica, desde que la sociedad demandante, en su calidad de desarrollador inmobiliario, en ningún momento ha solicitado a SAESA que le dé suministro (servicio) eléctrico para su consumo propio, sino que lo que ha solicitado, es la construcción de redes eléctricas, al interior de su loteo o proyecto inmobiliario, con el objeto de poder vender “urbanizados” cada uno de sus lotes, esto es, entregando la posibilidad de que los futuros compradores de dichas parcelas, pueda tener suministro eléctrico. En consecuencia, que la demandante no tiene la calidad de usuario para nuestra legislación eléctrica, en lo que respecta al mentado proyecto de electrificación, y cuyo pago constituye el objeto de las acciones deducidas en autos. Luego, difícilmente puede concurrir en la especie, la infracción que la contraria denuncia, a las normas del artículo 125 de la LGSE y artículo 105 del RLGSE. **b)** Esclarecido que la demandante no detenta de la calidad de “usuario”, corresponde aclarar que la empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica (aún dentro de su área de concesión, cuyo no es el caso de marras), no se encuentra obligada legalmente a facilitar la urbanización de estos grandes proyectos inmobiliarios rurales mediante la construcción de redes eléctricas para su beneficio, sino por el contrario, la obligación se limita a suministrar energía eléctrica a “los usuarios” (los que utilizan el suministro eléctrico para consumirlo directamente), dentro de zona de concesión y en la misma tensión que indica el correspondiente decreto de concesión. **c.-** Sin perjuicio de no concurrir en la especie los requisitos del artículo 125 de la LGSE, la demandante en su libelo, erróneamente asimila su situación con la de un usuario final de servicio eléctrico (tengamos en cuenta que se trata de una inmobiliaria dueña de un Proyecto de Loteo), e intenta sostener que la construcción de un proyecto eléctrico en zona rural que incluye la instalación de 3 subestaciones aéreas de 45 kVA Trifásica; 1 subestación aérea de 15 kVA Trifásica, la construcción de 1.067 metros de Línea Media Tensión Trifásica y de 2.523 metros de Línea Baja Tensión Trifásica así como la construcción de 497 metros de Línea Baja Tensión monofásica, se asimilaría a las obras de conexión



«RIT»

de un empalme eléctrico, lo cual no guarda relación alguna con lo que efectivamente regula nuestra legislación eléctrica. Por tanto, ruego a US., se sirva tener por evacuado el trámite de duplica.

Se llamó a las partes a conciliación y no se produjo acuerdo.

Se recibió la causa a prueba por resolución que fue notificada legalmente a las partes

La parte demandante produjo la siguiente prueba:

- Documental de folios 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 90, 113, 115, 116, 118, 137, 141 y 143.

La parte demandada produjo la siguiente prueba:

- Documental de folios 42 y 51;
- Testimonial de folios 87 y 102.

Se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**EN CUANTO A LA TACHA PROMOVIDA POR LA DEMANDANTE RESPECTO DEL TESTIGO MAURICIO ALEJANDRO GORMAZ BARRIENTOS, DE FOLIO 87:**

**PRIMERO:** La parte demandante tachó al testigo por la causal establecida en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es: “los trabajadores y labradores dependientes de las personas que exigen su testimonio”, en virtud de lo señalado por el testigo en las respuestas a las preguntas de tachas, solicitando o con la finalidad de que, si se llega a formular en definitiva la tacha, se le reste al testigo el valor probatorio emanado de su testimonio; y en definitiva este sea rechazado por afectar una causal de inhabilidad legal.

**SEGUNDO:** La parte demandada evacuó el traslado y solicitó el rechazo de la causal de inhabilidad, por cuanto, aquella dice relación con los trabajadores, o mejor dicho con la dependencia que el testigo pueda tener con la parte que lo ha presentado a declarar. En este caso, la empresa demandada es Sociedad Austral De Electricidad S.A. y el testigo ha señalado en reiteradas oportunidades, en cada una de las reiteradas preguntas que se le han formulado, que trabaja para la empresa SAESA Innova Soluciones SpA, que es una empresa totalmente distinta que Sociedad Austral De Electricidad S.A. En consecuencia, siendo claro de que el testigo no es dependiente de la parte que lo ha presentado a declarar en dicha calidad, no corresponde que se acoja la causal de inhabilidad que se ha formulado en contra del testigo; por lo tanto, esta parte solicita el rechazo de la tacha con expresa condenación en costas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KEVGXXTXJXX

**TERCERO:** *“El elemento indispensable para configurar la causal N°5 del artículo 358 hace relación con la dependencia laboral existente entre el testigo y la persona que lo presenta a declarar. La dependencia está intrínsecamente vinculada con la idea de subordinación regulada por la legislación laboral. La dependencia implica una jerarquización y una relación de subordinación. Además, la dependencia debe ser estable y permanente entre el testigo y la parte que lo presenta a declarar. Cuando en una declaración testimonial el testigo reconoce que trabajaba bajo subordinación y dependencia para una persona, empresa, sociedad o compañía, que la presenta a declarar, se configura la causal del artículo 358 N°5, y el tribunal debería acoger la tachada deducida.”* (Recopilación y sistematización de jurisprudencia sobre tachas de testigos. Causales N°4, N°5, N°6 y N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, resueltas por Tribunales Superiores y Jueces Árbitros, Rodrigo Pérez García. Universidad de Chile, noviembre de 2011, Página 72).

**CUARTO:** El testigo dijo que trabajó para SAESA S. A. desde diciembre del 2.003 hasta agosto del 2.021, y que desde agosto de 2.021 a la fecha trabajaba en SAESA INNOVA, ubicada en el piso 4 del edificio Plaza Sur, o que *“trabajamos SAESA Innova, edificio totalmente independiente, al aplicarse la ley del giro exclusivo”*; es decir, que labora en una empresa distinta a aquella que lo presentó como testigo, por lo que no se configura el vínculo de subordinación y dependencia que exige la causal invocada. En consecuencia, la tachada fundada en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil es improcedente.

**EN CUANTO A LA TACHA PROMOVIDA POR LA DEMANDANTE RESPECTO DEL TESTIGO LUIS ESTEBAN VIZCARRA MILLÁN, DE FOLIO 87:**

**QUINTO:** La parte demandante tachó al testigo por la causal establecida en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es: “los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”, en virtud de las respuestas que ha dado el testigo a las preguntas de tachada en que ha reconocido que efectivamente trabaja para una empresa que forma parte del grupo SAESA. Además, de la tachada establecida en el art. 358 N° 6 esto es: “los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto”, el testigo ha reconocido que ha confeccionado informes y ha participado en juicios, en donde grupo SAESA es partícipe, solicitando al tribunal que si se llega a formular en definitiva la tachada se le reste al testigo el valor probatorio emanado de su testimonio, que en definitiva sea rechazado por afectarle una o más causales de inhabilidad.

**SEXTO:** La parte demandada evacuó el traslado y solicitó el rechazo de la tachada formulada. En primer lugar, de la causal del N°5, si bien el testigo ha reconocido que tiene una vinculación laboral-



contractual con la empresa Sociedad Austral de Electricidad S. A., cabe tener en cuenta que dicha inhabilidad data de la época de la dictación del texto original del CPC, año 1902, mientras que la fecha de la dictación del texto original del Código del Trabajo data en una fecha posterior, año 1931, que este texto respondiendo a todas las leyes desperdigadas en esa época, no contenía las normas de protección al trabajador que el día de hoy si existen en la normativa laboral, a saber: sistema de reglado y formal de determinación de contrato individual de trabajo, protección de los derechos fundamentales de los trabajadores mediante procedimientos laboral, entre otros; que los derechos otorgados por las leyes del trabajo constituyen en general una garantía suficiente para que las personas sometidas a dependencia de otras, puedan declarar en libre de presión de parte de sus empleadores o patrones. Por su parte, de la declaración del testigo, no parece existir presión alguna de parte de su empleador y que puede determinar la falta de la debida imparcialidad del mismo, por lo que corresponde que se rechace la tacha interpuesta. Respecto de la tacha del N° 6 esto es: falta de la debida parcialidad, corresponde también que se rechace, por cuanto, de la declaración del testigo, en parte alguna él ha señalado tener algún tipo de interés económico en el resultado del juicio y tampoco el testigo, a diferencia de lo que señala la contra parte en la fundamentación de su tacha, el testigo en ninguna parte, nunca ha señalado que haya trabajado en la confección de informes para su empleador; solamente reconoció haber prestado declaración en dos juicios, uno hace 6 años y el otro hace un mes. En consecuencia, no concurren en la especie los supuestos para fundar la causal de inhabilidad, por lo tanto, la parte solicita el rechazo de ambas causales de inhabilidad, ambas del N° 5 y N° 6 y ambas sean rechazadas con costas.

**SÉPTIMO:** El testigo señaló que *“Yo trabajo para la empresa Sociedad Austral De Electricidad, de 2.015, siendo jefe de obras a clientes, el 2017 para la misma empresa (Sociedad Austral de Electricidad) como jefe de venta y servicios, y actualmente, para la Sociedad Austral de Electricidad como jefe de obras a clientes”* *“En la empresa que trabajo, Sociedad Austral De Electricidad, tenemos beneficios del Sodexo, descuentos tarifa, y todo lo que corresponde a servicio médico”*, y que Sociedad Austral de Electricidad es parte del grupo SAESA. Es decir, reconoció que es trabajador de SAESA S. A, -la parte que lo presentó como testigo -, bajo vínculo de subordinación y dependencia. En consecuencia, la tacha fundada en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento civil es procedente.

**OCTAVO:** *“La jurisprudencia y la doctrina han estimado al respecto, que el interés requerido por la ley para inhabilitar a un testigo debe manifestarse en el interés pecuniario cierto, directo o indirecto que se tenga en el resultado del juicio y que tal interés sea suficiente para transformar a dicho testigo en parcial.”* (Recopilación y sistematización de jurisprudencia sobre tachas de testigos. Causales



Nº4, Nº5, Nº6 y Nº7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, resueltas por Tribunales Superiores y Jueces Árbitros, Rodrigo Pérez García. Universidad de Chile, noviembre de 2011, Página 215).

**NOVENO:** Los antecedentes son insuficientes para concluir que el testigo tiene interés directo o indirecto en el pleito, esto es, la expectativa o derecho a obtener un beneficio o contraprestación económicos a consecuencia de una sentencia favorable a la parte demandada, y que, por tanto, es parcial. Además, el testigo aclaró que hace 6 o 5 años atrás, y que hace un mes, participó como testigo en juicios de SAESA S. A.; así, no hay antecedentes de que haya elaborado informes, como sostiene la incidentista. En consecuencia, la tacha fundada en el artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil es improcedente.

**EN CUANTO A LA TACHA PROMOVIDA POR LA DEMANDANTE RESPECTO DEL TESTIGO CÉSAR ALEJANDRO CALFUQUEO BEROÍZA, DE FOLIO 87:**

**DÉCIMO:** La parte demandante tachó al testigo por la causal establecida en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, esta es: “los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio”, dado que, en la declaración del testigo, señala que efectivamente la empresa en la cual señala trabajar pertenece al grupo SAESA, además de recibir beneficios de este grupo y se entiende que se cumple con la causal señalada, en cuanto a que hay una relación laboral. Por lo tanto, solicito al tribunal que en el evento que se formule en definitiva la tacha, se le reste al testigo el valor probatorio emanado de su testimonio y en definitiva que sea rechazado por afectarlo una causal de inhabilidad legal, según lo expuesto.

**UNDÉCIMO:** La parte demandada evacuó el traslado y solicitó el rechazo de la causal de inhabilidad formulada en el N° 5 del art. 358 del CPC, por cuanto, dicha causal dice relación con que el testigo sea dependiente de la parte que lo ha presentado como tal. El testigo ha reconocido de forma expresa, en más de una oportunidad, que presta servicio para empresa Eléctrica de La Frontera S.A., Frontel, y no para Sociedad Austral de Electricidad S.A., que es la empresa demandada en este juicio; en consecuencia, ninguna relación tiene su empleador con la parte que lo ha presentado a declarar en este juicio. Además, dentro de los fundamentos para atribuir esta causal de inhabilidad está que la empresa con respecto a la cual señala el testigo que presta servicio que es La Frontera S.A., es una empresa que forma parte del holding del grupo SAESA, sin embargo, grupo SAESA tampoco es la demandada en estos autos, sino que como ya se señaló anteriormente, la empresa demandada es Sociedad Austral de Electricidad; en consecuencia, no existiendo o no concurriendo en la especie los fundamentos de la causal de inhabilidad que se ha formulado, corresponde que en definitiva sea rechazada con costas.



**DUODÉCIMO:** El testigo expresó que “*Trabajo para la Empresa Eléctrica la Frontera cumpla 17 años ahora en diciembre, trabajo en la subgerencia de desarrollo operacional y mi cargo actual es encargado de la unidad de sistema geográfico*”; esto es, en una empresa distinta de aquella que lo presentó como testigo, por lo que no se configura el vínculo de subordinación y dependencia que exige la causal invocada. Por consiguiente, la tachada fundada en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil es improcedente.

**EN CUANTO A LA TACHA PROMOVIDA POR LA DEMANDANTE RESPECTO DEL TESTIGO PABLO ENRIQUE MILLÁN PÉREZ, DE FOLIO 102:**

**DÉCIMO TERCERO:** La parte demandante tachó al testigo por la causal establecida en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil esto es, los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio, ya que de lo que se desprende de las respuestas del testigo, efectivamente trabaja para la empresa Saesa, que pertenece al Grupo Saesa y tienen un vínculo laboral que ha sido ratificado en esta declaración por el testigo. Es por ello que formulamos esta tachada por tener una inhabilidad legal efectivo para declarar y, en definitiva, solicitamos al Tribunal que le reste al testigo el valor probatorio emanado de su testimonio en el evento que se acoja la tachada y, en definitiva, este sea rechazado por afectarlo una causal de inhabilidad legal, como ya lo hemos señalado.

**DÉCIMO CUARTO:** La parte demandada evacuó el traslado y solicitó el rechazo de la tachada formulada respecto a la causal del número 5 que se ha invocado, cabe tener en cuenta que la referida Inhabilidad data de la época de inversión de original del Código del Procedimiento Civil del año 1902, en que la fecha de dictación del texto original del código de trabajo data de una fecha posterior desde el año 1931, este texto refundió todas las leyes laborales desperdigadas en dicha época y no contenía las normas de protección a los trabajadores que al día de hoy sí existen en la normativa laboral, a saber, sistema regulado y formal de terminación de contrato individual de trabajo, protección de los derechos fundamentales de los trabajadores mediante el procedimiento de cultura laboral, entre otros, además, los derechos otorgados por las leyes de trabajo constituyen en general, una garantía suficiente para que las personas sometidas a dependencia de otras puedan declarar libres de presión de parte de sus empleadores o patrones, además y por su parte, la declaración del testigo Pablo Millan, no aparece de su declaración, no aparece existir presión alguna de parte de su empleador, y que pueda determinar la falta de la debida imparcialidad del mismo, que es lo que la ley busca proteger, por lo que corresponde que en definitiva, se rechace la tachada interpuesta.

**DÉCIMO QUINTO:** El testigo manifestó que “*Actualmente trabajo para SAESA, desde el año 2.007*”, “*y actualmente y desde el*



año 2.001 ejerzo el, el, el cargo de Gerente Zonal en la Zona de Chiloé”, y que recibe “alimentación, obviamente la remuneración y lo referido a la disponibilidad de ocupar móviles para, obviamente, el trabajo en terreno, no recibo descuentos en boleta de suministro. Es decir, reconoció que es trabajador de la parte que lo presentó como testigo, bajo vínculo de subordinación y dependencia. En consecuencia, la tacheta es procedente.

### **EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL DE REEMBOLSO:**

**DÉCIMO SEXTO:** El artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos señala que “*Es servicio público eléctrico, el suministro que efectúe una empresa concesionaria de distribución a usuarios finales ubicados en sus zonas de concesión, o bien a usuarios ubicados fuera de dichas zonas, que se conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante líneas propias o de terceros (...)*”. Por su parte, el artículo 125 establece que “*En su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que el usuario esté ubicado en la zona de concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 126°. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario*”. El artículo 126 dispone que “*Cualquier empresa eléctrica podrá exigir a los usuarios de cualquier naturaleza que soliciten servicio, o a aquéllos que amplíen su potencia conectada, aportes de financiamiento reembolsables para la ejecución de las ampliaciones de capacidad requeridas en generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Adicionalmente, la empresa podrá exigir a los usuarios que soliciten o amplíen su servicio en potencias conectadas superiores a 10 kilowatts, una garantía suficiente para caucionar que la potencia solicitada por éstos será usada por el tiempo adecuado. Los montos máximos por concepto de financiamiento serán determinados por las empresas y podrán ser aplicados previa publicación en un diario de circulación nacional*”. El artículo 127 dice que “*Adicionalmente a lo estipulado en el artículo 126°, las empresas concesionarias de servicio público de distribución podrán exigir a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario. Dicho aporte podrá efectuarse de dos formas: 1.- El peticionario podrá construir las obras de extensión sobre la base de un proyecto aprobado por la empresa eléctrica. El valor de estas instalaciones, que corresponde al financiamiento reembolsable aportado por el peticionario, será determinado por la empresa en el momento de aprobar el proyecto; 2.- El peticionario podrá financiar las obras por el valor determinado por la empresa, obligándose ésta a construirla, una vez asegurado el financiamiento*”. Luego, el artículo 128 expresa que “*Los aportes financieros que, según las disposiciones de la presente ley, deban ser reembolsados por la empresa eléctrica, se devolverán a la persona*



natural o jurídica que haya entregado el aporte, o bien a las personas que ésta designe, según la estipulación que acepte la empresa. Con la excepción de las devoluciones mediante acciones, dichos aportes deberán ser reembolsados por su valor inicial reajustado e intereses. Para las empresas de transmisión, el interés deberá ser igual a la tasa de descuento establecida en el artículo 118° al momento del acuerdo. Para las empresas generadoras y distribuidoras, el interés deberá ser igual a la tasa de actualización estipulada en el artículo 182° de esta ley. La forma y el plazo de las devoluciones se determinarán en un contrato que se firmará entre la empresa y quien deba hacer el aporte reembolsable. Las devoluciones podrán ser pactadas en dinero, en documentos mercantiles, en suministro eléctrico, en acciones comunes de primera emisión de la propia empresa o mediante aquellas acciones que ésta hubiere recibido de otra empresa eléctrica como devolución de aportes por ella efectuados, o mediante cualquier otro mecanismo que acuerden las partes. La elección de la forma de devolución corresponderá a la empresa concesionaria, pero el aportante podrá oponerse a ella cuando la devolución propuesta por la empresa no le significare un reembolso real. Si no hubiere acuerdo resolverá la Superintendencia, oyendo a las partes. Si la devolución pactada no se hiciere en dinero, los títulos respectivos deberán ser endosables. Si el mecanismo de devolución fuere otro que acciones, el plazo máximo de reembolso será de quince años”.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** En concordancia, el artículo 105 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que “Sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo 5 de este Título, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio en su zona de concesión, a quien lo solicite, sea que el usuario esté ubicado en la zona de concesión o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario. Para dichos efectos, las empresas distribuidoras deberán mantener a disposición del público la información técnica de sus instalaciones incluyendo los planos de sus redes de distribución, a fin de entregarla cada vez que les sea requerida por estos últimos, para el adecuado diseño, ejecución y conexión de las instalaciones eléctricas, a fin de evitar peligro para las personas o daño en las cosas. Las empresas distribuidoras deberán entregar la información señalada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, la que podrá ser entregada mediante técnicas y medios electrónicos”. Por su parte, el artículo 112 dice que “Los empalmes deberán ser contruidos por los concesionarios. No obstante, ellos podrán ser contruidos por los clientes de acuerdo a las normas, especificaciones y procedimientos que fije la Superintendencia o el Ministerio, según corresponda. En todo caso, la conexión del empalme a la red del concesionario sólo podrá ser efectuada por éste (...). El artículo 136 señala que “Podrá exigirse aportes financieros reembolsables a los usuarios, en los



siguientes casos: a) Cuando un usuario de cualquier naturaleza solicite a una empresa eléctrica, que se le otorgue suministro o que se amplíe su potencia conectada. En este caso, el aporte estará limitado a lo necesario para la ejecución de las ampliaciones de capacidad en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que se requieran a consecuencia de la solicitud del usuario. b) Cuando un usuario solicite servicio a una empresa concesionaria de servicio público de distribución. En este caso, el aporte estará limitado a lo necesario para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario”. Asimismo, el artículo 138 dispone que “En el caso de la letra b) del artículo 136, los aportes que se requieran podrán efectuarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades, a elección del interesado o usuario: a) El interesado podrá construir directamente las obras de extensión, sobre la base de un proyecto aprobado por la empresa eléctrica. Si el peticionario opta por esta modalidad, deberá presentar a la empresa un proyecto elaborado por un instalador autorizado, para su aprobación y para la valorización del aporte reembolsable. La empresa sólo podrá rechazar un proyecto en caso de no cumplir los requerimientos técnicos pertinentes. Junto con la aprobación del proyecto, la empresa determinará el valor de las instalaciones que se ejecutarán, el que corresponderá al monto del aporte a reembolsar. Este valor en ningún caso podrá ser inferior al que la empresa exigiría para ejecutar las obras por su cuenta. La aprobación y valorización indicadas deberán informarse por escrito al peticionario en un plazo de 15 días, contados desde la presentación del respectivo proyecto. b) El interesado podrá financiar las obras según el valor determinado por la empresa, obligándose ésta a construirlas una vez asegurado el financiamiento. En todo caso, el valor a reembolsar no podrá exceder de los costos precisamente involucrados en la ejecución de las obras que sean necesarias”. Además, el artículo 140 manifiesta que “Una vez valorizado el aporte por la empresa, ésta deberá comunicarlo por escrito al interesado, en el plazo señalado en el artículo 138, indicando el mecanismo de devolución que elige y sus condiciones. La empresa podrá elegir uno de los siguientes mecanismos de devolución: a) Dinero; b) Documentos mercantiles; c) Suministro eléctrico; d) Acciones comunes de primera emisión de la propia empresa; e) Acciones de otra empresa eléctrica que la restituyente hubiere recibido como devolución por aportes efectuados por ella, y f) Cualquier otro mecanismo que, cumpliendo con normas de los artículos siguientes, sea aceptado por el aportante”. A continuación, el artículo 141 enuncia que “La forma y condiciones de devolución que la empresa elija deberán cumplir siempre con los siguientes requisitos mínimos: a) La devolución deberá ser hecha a la persona natural o jurídica que hubiere entregado el aporte, o bien a la que ésta designe y sea aceptada por la empresa. En consecuencia, el mecanismo elegido deberá considerar siempre las condiciones necesarias para el cumplimiento de esta obligación. b) El reembolso comprenderá el valor inicial del aporte, expresado en moneda de curso legal, reajustado, y



un interés igual al 10% anual, con la sola excepción de las devoluciones mediante acciones. c) Las devoluciones deberán efectuarse en un plazo máximo de 15 años, salvo que se efectúen mediante acciones, en cuyo caso no existirá plazo alguno. d) Los títulos representativos de la devolución deberán ser endosables. e) La devolución deberá significar para el aportante un reembolso real. Para estos efectos, no constituirán un reembolso real aquel que no cumpla con las condiciones que establece el presente artículo; aquel cuyo valor, a la fecha de la comunicación a que se refiere el artículo 140, represente una pérdida patrimonial para el aportante; ni aquel que, por cualquier otra circunstancia, el aportante estime que no lo sea. Correlativamente el artículo 142 especifica que “Para que sea considerado reembolso real, la devolución en suministro eléctrico deberá cumplir, además, las siguientes normas: a) Para la determinación de la cantidad de unidades de potencia y energía en que se materializará la devolución, el valor del aporte deberá ser reajustado e incrementado por el interés correspondiente al plazo de la devolución, en la forma señalada en el artículo anterior, de manera previa a su conversión a esas unidades según el valor vigente para ellas a la fecha de la comunicación a que se refiere el artículo 140. b) La devolución no podrá radicarse en un inmueble o instalación determinada y deberá efectuarse en aquel o aquella que el aportante señale. En consecuencia, durante el plazo en que deba tener lugar la devolución, el aportante tendrá derecho a sustituir el inmueble o instalación en que deba seguir suministrándose electricidad con cargo al aporte. El contrato respectivo deberá establecer un mecanismo alternativo de devolución para el excedente, para el caso que la empresa se encuentre impedida de efectuar la modificación antes señalada. c) La devolución en electricidad se hará efectiva mediante la compensación, en cada período de facturación, de las unidades físicas de potencia y energía efectivamente consumidas por el aportante en dicho período. Si a la fecha de expiración del plazo estipulado para la devolución existiese un saldo o remanente a devolver, éste deberá ser reembolsado en dinero efectivo, según el valor que tengan a esa fecha las unidades de potencia y energía no utilizadas”. El artículo 143 dispone que “La forma y el plazo de las devoluciones convenidas conforme a las disposiciones anteriores, se determinarán en un contrato que se firmará entre la empresa y el aportante”. Adicionalmente el artículo 144 menciona que “El aportante tendrá derecho a oponerse a la forma de devolución propuesta por la empresa y a reclamar la intervención de la Superintendencia, siempre que dicha devolución no le signifique un reembolso real”. Finalmente, el artículo 303 del Reglamento define que “Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, se entenderá por: (...) 6) Baja tensión: Tensión inferior o igual a 400 Volts. 13) Empalme: Conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan el medidor de la instalación o sistema del cliente, a la red de suministro de energía eléctrica. 22) Línea de baja tensión: Línea eléctrica que opera en una tensión igual o inferior a 400 Volts. 27) Media tensión: Tensión



superior a 400 Volts e inferior o igual a 23.000 Volts. 38) *Usuario o cliente: Es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico (...).*

**DÉCIMO OCTAVO:** El artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que *“Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno (...).* Por su parte, el artículo 136 dispone que *“Mientras en una población, apertura de calles, formación de un nuevo barrio, loteo o subdivisión de un predio, no se hubieren ejecutado todos los trabajos de urbanización que exigen los dos artículos precedentes y la Ordenanza General, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes, enajenarlos, acordar adjudicaciones en lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas de sitios, constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones o celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de dichos terrenos (...).* Y el artículo 138 señala que *“Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el ocupante, poseedor, propietario, loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo”.*

**DÉCIMO NOVENO:** No está discutido, o emana de los antecedentes y pruebas que:

1. El 11 de agosto de 2016 Dokorova Yackis presentó a SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A. (SAESA S. A.) solicitud de presupuesto por proyecto eléctrico.
2. A Noviembre de 2019 SAESA S. A. era propietaria de líneas de distribución cercanas al inmueble donde estaba emplazado el loteo Costa Terao, de la comuna de Chonchi, en especial, a través de los postes 871928 y 871929.
3. El 15 de Noviembre de 2019 SAESA S. A. emitió a Andrés Pellegrini presupuesto N° 37207, sobre suministro loteo sector Terao, Chonchi, por valor de 2.358,1 Unidades de Fomento (U.F) más Impuesto al Valor Agregado (IVA), según lo siguiente: **1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS APORTADAS POR SAESA.**  
1.1 - Intercalar 1 poste de concreto armado de 13,5 m entre N°871928 y 871929. 1.2.- Instalar 1 Tierra de protección. 1.3.- Instalar 3 Desconectores Fusible XS-25kV 100 A. **2.-**



**DESCRIPCION DE LAS OBRAS A CARGO DEL SOLICITANTE.** 2.1.- Instalar 3 subestaciones aérea de 45 kVA Trifásica 23.000/400-231 V, montada en postes de concreto armado de 11,5 metros litoral, con su respectivo equipo de protección en media y baja tensión. 2.2.- Instalar 1 subestación aérea de 15 kVA Trifásica 23.000/231 V, montada en postes de concreto armado de 10 metros litoral, con su respectivo equipo de protección en media y baja tensión. 2.3.- Construir 1.067 metros de Línea Media Tensión Trifásica conformada por 3 conductores de Aluminio protegido AAAC 35 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 10, 11,5 y 13,5 metros litoral. 2.4.- Construir 2523 metros de Línea Baja Tensión Trifásica, conformada por un conductor preensamblado de 3x50+50 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 8,7, 10 y 11,5 metros litoral. 2.5.- Construir 497 metros de Línea Baja Tensión monofásica, conformada por un conductor preensamblado de 1x25+25 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 8,7 metros litoral. 2.6.- Instalar 23 Tierras de servicio. 2.7.- Instalar 10 Tirantes Común Normal. 2.8.- Instalar 34 Tirantes BT Normal. 2.9.- Instalar 42 cajas de empalmes. 2.10.- Instalar 15 Estribos MT. 2.11.- Instalar 14 Estribos BT. 2.12.- Instalar 9 Pararrayos 23kV, con su respectiva tierra de protecciones". El presupuesto no hace alusión a si las obras están dentro o fuera del área de concesión de SAESA S.A".

4. El 14 de Septiembre de 2.020 SAESA S. A. emitió factura electrónica 6316044 a INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA, por \$ 84.546.639, IVA incluido, por SERVICIO Electrificación MT/BT Loteo Terao, Comuna de Chonchi, WF 547555, PP No 37207, PEP 201/NC-518-02-07.
5. El 17 de Septiembre de 2.020 INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA reconoció adeudar a SAESA S. A. \$ 84.546.639 por electrificación del Loteo Terao en la Comuna de Chonchi, WF 547555, que pagó con \$ 33.818.656 al contado, y el saldo de \$ 50.727.983 con 2 cheques, a 30 y 60 días.
6. El 12 de Febrero de 2.021 SAESA S. A. emitió a Andrés Pellegrini presupuesto N° 49272, adicional Loteo Terao 201NC518, por 275 UF más IVA, según el siguiente detalle. **"1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS FINANCIADAS POR CLIENTE.** 1.- Construir 96 metros de Línea Baja Tensión Trifásica, conformada por un conductor preensamblado de 3x50+50 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 8,7 metros litoral. 2.- Instalar 2 Tirantes Común Normal. 3.- Instalar 4 Tirantes BT Normal. 4.- Instalar 1 Poste de 11,5m c.a. 5.- Instalar 3 Postes de 8,7m c.a. 6.- Reemplazar 10 Postes de 10m c.a. por 11,5m c.a. 7.- Trasladar 3 Postes de 11,5m c.a. 8.- Uso retroexcavadora con punto. **NOTAS.** 1.- Obra fuera zona de concesión".



7. El 25 de Mayo de 2.021 SAESA S.A. emitió a Andrés Pellegrini presupuesto N° 51333, para instalación subestación de 45 KVA y retiro línea BT Loteo Terao (PP 51333), por 156 UF más IVA, según lo siguiente: **“1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS FINANCIADAS POR SAESA.** 1.1- *Instalar 1 subestación aérea de 45 kVA Trifásica 23.000/400-231 V, montada en postes de concreto armado de 10 metros litoral, con su respectivo equipo de protección en media y baja tensión.* 1.2.- *Construir 10 metros de Línea Media Tensión Trifásica conformada por 3 conductores de Aluminio protegido AAAC 35 mm<sup>2</sup>, entre el poste de concreto armado de 10 metros proyectado y N°871928 existente.* 1.3.- *Retirar 83 metros de Línea Baja Tensión Trifásica, conformada por un conductor preensamblado de 3x50+50 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 8,7 metros litoral.* 1.4.- *Instalar 1 Tirante BT Normal.* 1.5.- *Retirar 3 Tirantes BT Normal.* 1.6.- *Instalar 1 caja de empalmes.* 1.7.- *Instalar 1 kit de estribos MT 3F.* **2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS FINANCIADAS POR CLIENTE** 1. *Mano de Obra de lo indicado en punto anterior.* **NOTAS:** 1. *Obras en zona de concesión”.*
8. El 10 de Junio de 2.021 SAESA S.A emitió factura electrónica 6850253 a INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA, por \$ 9.703.145 IVA incluido, por SERVICIO ADICIONAL LOTEQ TERAQ, OFERTA 49272, PEP201/NC-518-02-07.
9. El 10 de Junio de 2.021 SAESA S.A. emitió factura electrónica 6850252 a INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA, por \$ 5.504.329 IVA incluido, por SERVICIO instalación sub estación de 45 KVA y retiro línea BT Loteo Terao, oferta 51333, PEP201/NC-518-02-07.
10. El 22 de Junio de 2.021 INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA pagó a SAESA S.A \$ 5.000.000, mediante transferencia bancaria por P 1 Fact 6850253 CTerao OFERTA 49272 PEP201NC51.
11. El 22 de Junio de 2.021 INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA pagó a SAESA S.A. \$ 4.703.145, mediante transferencia bancaria por P2 Fact 6850253 CTerao OF 49272PEP201NC5180207.
12. El 22 de Junio de 2.021 INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA pagó a SAESA S.A. \$ 5.000.000, mediante transferencia bancaria por Pago 1 Fact 6850252 CTerao Instalación Subestación.
13. El 22 de Junio de 2.021 INMOBILIARIA COSTA TERAQ SPA pagó a SAESA S. A. \$ 504.329, por Pago 2 Fact 6850252 CTerao Instalación Subestación.



14. El 25 de Noviembre de 2.021 JUAN PABLO RESTINI VILLASANTE, en representación de INMOBILIARIA COSTA TERAOS SPA, prestó declaración jurada de que su representada era dueña de las siguientes instalaciones eléctricas, ubicadas en sector Terao, comuna de Chonchi: *“3 subestaciones aéreas de 45 kVA Trifásica 23.000/400-231 V, montadas en postes de concreto armado de 11,5 metros litoral, con su respectivo equipo de protección en media y baja tensión. Instalar 1 subestación aérea de 15 kVA Trifásica 23.000/231 V, montada en postes de concreto armado de 10 metros litoral, con su respectivo equipo de protección en media y baja tensión. 1.067 metros de Línea Media Tensión Trifásica conformada por 3 conductores de Aluminio protegido AAAC 35 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 10, 11,5 y 13,5 metros litoral. 2523 metros de Línea Baja Tensión Trifásica, conformada por un conductor preensamblado de 3x50+50 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 8,7, 10 y 11,5 metros litoral. 497 metros de Línea Baja Tensión monofásica, conformada por un conductor preensamblado de 1x25+25 mm<sup>2</sup>, en postes de concreto armado de 8,7 metros litoral. 23 tierras de servicio. 10 tirantes común normal. 34 tirantes BT normal. 42 cajas de empalmes. 15 estribos MT. 14 estribos BT. 9 pararrayos 23 kw”*. Y señaló que su representada *“pretende transferirlas a SAESA a objeto de que esta asuma la mantención de las mismas”*
15. El 25 de Noviembre de 2.021 INMOBILIARIA COSTA TERAOS SPA y SAESA S. A. celebraron contrato de transferencia de instalaciones y/o equipos eléctricos, individualizadas en el Anexo 1, correspondientes a electrificación parcelación Costa Terao, sector Terao, Comuna de Chonchi.

**VIGÉSIMO:** Los antecedentes y pruebas son insuficientes para concluir que las obras en cuestión se situaban dentro de alguna de las zonas de concesión de SAESA. S. A., o que ésta cobrara por extensión de líneas dentro de su zona de concesión. En efecto, la parte demandante no adjuntó pruebas al respecto, en especial, de que su loteo estaba ubicado dentro de alguna de esas zonas. Sí adjuntó una respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que informó *“en el sector de Terao en la comuna de Chonchi se emplaza la zona de concesión otorgada mediante el decreto 187 del año 2.004, otorgado a la empresa SAESA”*, que se refiere al *“Sector Terao - Camanchaca Chiloé / Chonchi P-4575”*; esto es, una respuesta genérica, sin precisar si el inmueble donde estaba emplazado el loteo estaba o no ubicado dentro de esa zona de concesión. El plano de transferencia de instalaciones y servidumbres electrificación loteo Costa Terao del sector de Terao de la comuna de Chonchi indica *“Obra en zona de concesión”*. Y el presupuesto 51333 también señala *“Obra en zona de concesión”*. Sin embargo, la parte demandada presentó pruebas de que ese loteo estaba ubicado fuera de las zonas de concesión. Al efecto, acompañó el presupuesto 49272, en el cual



se lee “Obra fuera zona de concesión”. Asimismo, adjuntó el documento “Informe Técnico”, en el cual se describe que *“El proyecto “Electrificación Loteo Costa Terao” se conecta a las instalaciones de propiedad de SAESA, dentro de zona de Concesión Otorgada el 03 de Octubre del año 1984 con el Decreto de Concesión N° 252 en el poste de 11.5 mts con codificación N°871928. Los primeros 170 metros aproximadamente quedan dentro de zona de concesión antes indicada, y el resto del proyecto se construye fuera de esta...”*. Al respecto, su emisor, - César Alejandro Calfuqueo Beroíza -, lo reconoció como propio en declaración de testigo, y agregó que *“son obras que se ejecutaron para un loteo particular, fuera de zona de concesión, (...) para después lotear y vender esos terrenos; que “Nosotros por ley estamos obligados a entregar o a construir instalaciones dentro de la zona de concesión, (...) un polígono, una zona geográfica entregada por el ministerio de energía para que nosotros tengamos, como bien dicho, la concesión de la distribución y la mantención de las instalaciones y el proyecto en mención está fuera de estos polígonos de concesión, de la concesión otorgada”; que “Entonces, al revisar los antecedentes, podemos ver que el proyecto emplazado o construido está fuera de lo que es la zona de concesión otorgada por la forma de autoridad”; - y respecto del informe -, que “como se aprecia ahí en la imagen, en el punto rojo es donde nace o se conecta el proyecto en mención y todo lo que está dentro del fondo celeste es el polígono de concesión otorgada actual y todo lo que está, el resto del proyecto está fuera de ese polígono, por lo tanto, está fuera de zona de concesión. Ahí se ve que hay un, hasta donde llega el límite de la concesión otorgada que está más abajo y el 90% del proyecto, 95% del proyecto se encuentra fuera de esta zona de concesión”; que “dentro de nuestras funciones está transcribir todos los proyectos que se construyen en terreno y volcarlos a nuestro sistema técnico, toda esta información está georreferenciada y los polígonos de concesión otorgadas son las que almacenamos o guardamos dentro de nuestra base que se informa a la CNE cada vez que se tramita una concesión nueva”; que “el proyecto está dentro de una línea de distribución que está dentro de la zona de concesión 252 que es del año 84 y alrededor de esa zona existen otras concesiones otorgadas que son la concesión decreto 62, el decreto 223, el decreto 187 y el decreto 188, que son polígonos o zonas otorgadas alrededor del proyecto indicado”; que el predio de la empresa demandante “no está dentro de ninguno de esos decretos”; y que “Al momento del proyecto, no había zona de concesión en ese lugar, de hecho, no hay zona de concesión”. Del mismo modo, el documento Informe Técnico de Loteo Sector Terao Comuna de Chonchi, suscrito por Mauricio Alejandro Díaz Manquehual, que cita los decretos de concesión 252 de 1.984 y 62 de 2.004, afirma que “el área donde está emplazado el Loteo Terao, no se encuentra dentro de esta zona de concesión”. En concordancia, el testigo Mauricio Alejandro Gormaz Barrientos declaró que “este proyecto se encuentra fuera de zona de concesión y dentro de un predio particular, (...) estamos fuera de una zona de concesión*



*donde las distribuidoras eléctricas tienen la obligación de entregar suministros”; que “Fuera de zona de concesión se refiere a que dentro de la ley eléctrica, las distribuidoras eléctricas, requieren polígonos y servidumbres donde ellos tienen la facultad de entregar suministros eléctricos, cuando se encuentran fuera de esta zona de concesión no tienen la obligación de dar suministros eléctricos. No corresponde a una red de distribución, porque estas son instalaciones que están dentro del predio particular y fuera de zona de concesión”; que “Los antecedentes que pude ver es que este proyecto está fuera de zona de concesión y al revisar los antecedentes con este pantallazo en donde se detallan los polígonos que se encuentran en la zona de concesión, pudimos chequear que efectivamente este proyecto se encuentra fuera de esta zona de concesión y mediante un predio particular”. En conclusión, no consta que las obras cobradas estuvieran ubicadas dentro de alguna zona de concesión de SAESA S. A.; o que SAESA S. A. hubiera cobrado por obras de extensión de sus líneas de distribución en zona de concesión.*

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Conforme a la legislación eléctrica, los Aportes Financieros Reembolsables suponen la existencia de un contrato, celebrado a requerimiento de la concesionaria, que establezca las sumas, el plazo y forma en que se reembolsarán o restituirán. Al respecto, los antecedentes y pruebas son insuficientes para concluir que SAESA S.A. exigió a INMOBILIARIA COSTA TERA SPA la sumas de 2358,1, 275 y 156 Unidades de Fomento más Impuesto al Valor Agregado a título de Aportes Financieros Reembolsables. En efecto, no hay documento que así lo señale, ni elementos de los cuales pueda desprenderse ese pacto. Tal es así que no hay ningún antecedente sobre el plazo y forma en que se reembolsarían esos supuestos aportes. Incluso aparece que le concedió plazo para que pagara las sumas cobradas. Es claro que la Ley permite a las concesionarias exigir ese aporte, derecho que pueden ejercer o no; y que, - en el caso -, SAESA S. A. no usó. Y en cambio, aparece que ejecutó - como cualquier constructor autorizado, que podía hacerlo en esa época, y a cambio de un precio -, las obras al interior del loteo. Aparece también que las líneas y complementos, eran de propiedad de INMOBILIARIA COSTA TERA SPA, - según declaración de su representante -, y que fueron transferidas a SAESA S. A. mediante contrato de transferencia de instalaciones y/o equipos eléctricos, con el fin de *“explotar y mantener en buen estado las instalaciones y/o equipos eléctricos”*. En relación, las resoluciones administrativas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no permiten llegar a una conclusión distinta, pues se refieren a líneas subterráneas, ubicadas dentro de un radio urbano, que no es el caso en cuestión; o a cobros por líneas de la misma tensión, que no cuadran con la situación en análisis. Asimismo, la jurisprudencia de las I. Corte de Apelaciones de Santiago y de la E. Corte Suprema tampoco son homologables, pues se refieren a reclamos de ilegalidad, que no se pronuncian sobre el problema en cuestión, sino que



respecto a si la Superintendencia de Electricidad y Combustibles actuó o no dentro de su competencia. Del mismo modo, la respuesta del Ministerio de Energía se limita a transcribir el artículo 126 de la Ley General de Servicios Eléctricos, sin analizar casos en que la legislación eléctrica autoriza a cobrar sumas de dineros a los clientes. Y el rol C-1.303-2.023 del Segundo Juzgado de Letras de Osorno, tenido a la vista, no aporta antecedentes distintos.

### **EN CUANTO A LA ACCIÓN SUBSIDIARIA DE LA RESTITUCIÓN DE PAGO NO DEBIDO:**

**VIGESIMO SEGUNDO:** El artículo 2.295 dispone que *“Si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho a repetir lo pagado. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito; pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor”*. El artículo 2.297 expresa que *“Se podrá repetir aun lo pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural”*. Y, finalmente, el artículo 2.299 establece que *“Del que da de lo que no debe no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en los hechos como en el derecho”*.

**VIGÉSIMO TERCERO:** **“CAPÍTULO IV EL PAGO DE LO NO DEBIDO. 750. Concepto.** Siempre que hay pago indebido, es porque se cumple una obligación que no existe, ya sea que carezca totalmente de existencia y nunca la haya tenido, o se haya extinguido, o se yerre en la prestación, en quien la hace o a quien se hace. El pago supone una obligación previa entre dos personas, acreedor y deudor, que se va a extinguir por el cumplimiento. Si no hay obligación, si se paga a quien no es el acreedor, o creyéndose pagar una deuda propia se cancela una ajena, y se cumplen los requisitos que luego estudiaremos, hay un pago de lo no debido. Por ello podemos decir que, en virtud del pago indebido, quien paga por error lo que no debe, tiene derecho a solicitar la restitución de lo pagado indebidamente. **751. Naturaleza jurídica del pago indebido.** Ya al estudiar la teoría general del cuasicontrato, hemos tenido oportunidad de detenernos en el punto (N°s 191 y 192). Para nuestro Código se trata de un cuasicontrato y así lo reglamenta. (...) Por ello parece más acertado concluir que el pago de lo no debido, con mucho de aplicación del enriquecimiento sin causa, es una institución autónoma; una fuente de la obligación de restituir o indemnizar, si aquello no es posible. La Corte Suprema ha declarado que el pago indebido se funda en el enriquecimiento sin causa, pero éste no basta para que se presente aquel, pues deben concurrir sus requisitos legales propios, que pasamos a estudiar. **752. Requisitos** para que el pago sea indebido. Enunciación. Para que nos encontremos frente a un pago indebido, deben reunirse los siguientes requisitos: 1° Debe haber



*mediado un pago; 2°. Al efectuarlo se debe haber cometido un error; 3°. El pago debe carecer de causa o, como dicen algunos, debe haber inexistencia de deuda objetiva o subjetivamente. (René Abeliux Manasevic. Las Obligaciones. Tomo II. Editorial Thompson Reuters. Sexta edición actualizada. Año 2.014. P. 813- 818).*

**VIGESIMO CUARTO:** La parte demandante se limitó a señalar las normas que configuran el cuasicontrato de pago de lo no debido, sin explicar mayormente los hechos en que fundaba la acción de restitución. No obstante, los antecedentes y pruebas son insuficientes para concluir que pagó lo no debido. Desde luego, fue ella quien inició los trámites que la condujeron a pagar, en épocas distintas, y con el mismo fin; o sea, dotar de energía eléctrica a los lotes de que era propietaria. Como se transcribió, el loteador es obligado a la ejecución de las instalaciones energéticas, a su costa, por lo que era de su conocimiento que debía incurrir en gastos para llevar a cabo esas obras. Y como se estableció, INMOBILIARIA COSTA TERA O SPA reconoció adeudar el equivalente a 2.358,1 Unidades de Fomento, más Impuesto al Valor Agregado, que pagó al contado y se obligó a pagar a plazo; y que, además, pagó el equivalente a 275 y 156 Unidades de Fomento más Impuesto al Valor Agregado, por líneas, subestaciones, postes, empalmes, tomas de tierra, mallas y cajas distribuidoras, entre otros elementos, para líneas ubicadas al interior del Condominio; precisamente, para proveer de energía eléctrica a los distintos propietarios de lotes. Entonces, no puede concluirse que pagara por error, que esos pagos carezcan de causa o de obligación que sirviera de fundamento, o que fueran ilegales.

**Y VISTO ADEMÁS** los artículos 1.444, 1.545, 1.698, 1.568, 2.295, 2.297 y 2.299 del Código Civil; 7, 125, 126, 127 y 128 de la Ley General de Servicios Eléctricos; 105, 112, 136, 140, 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; 134, 136 y 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; y 144, 342, 346, 349, 358, 384, 426 y 427 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

**SE RECHAZAN LAS TACHAS DEDUCIDAS CONTRA LOS TESTIGOS MAURICIO ALEJANDRO GORMAZ BARRIENTOS Y CÉSAR ALEJANDRO CALFUQUEO BEROÍZA, FUNDADAS EN LA CAUSAL QUINTA DEL ARTÍCULO 358 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL; Y CONTRA LUIS ESTEBAN VIZCARRA MILLÁN, FUNDADA EN LA CAUSAL SEXTA DEL ARTÍCULO 358 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.**

**SE ACOGEN LAS TACHAS CONTRA LOS TESTIGOS LUIS ESTEBAN VIZCARRA MILLÁN Y PABLO ENRIQUE MILLÁN PÉREZ, FUNDADAS EN LA CAUSAL QUINTA DEL ARTÍCULO 358 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.**



«RIT»

**SE RECHAZAN LAS DEMANDAS PRINCIPAL DE REEMBOLSO Y SUBSIDIARIA DE RESTITUCIÓN DE PAGO NO DEBIDO;** con costas.

Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula; para el caso de que no fuera notificada de otra forma.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Osorno, veinte de Julio de dos mil veinticuatro.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KEVGXXTXJXX